

Continuación de la 43.^a sesión ordinaria. 9 de Septiembre de 1913

PRESIDENCIA DEL DR. VICTORINO DE LA PLAZA

SUMARIO: I.—Asuntos entrados.

II.—Moción de preferencia del señor senador Posse para el crédito suplementario á que se refiere el número IV.

III.—Se aprueba una indicación del señor senador Virasoro para que las solicitudes de premios en tierras pasen á estudio de la Comisión de Guerra.

IV.—Se aprueba un despacho de la Comisión de Presupuesto en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo abriendo un crédito suplementario de \$ 641.619 %, para reforzar diversos ítems del Presupuesto vigente.

V.—Termina la consideración en particular del proyecto de Caja de Jubilaciones y Pensiones para los empleados ferroviarios.

Señores senadores

Albarracín
Carbó
Civit
Crotto
Dávila
Del Pino
Del Valle Iberlucea
Echagüe
Esteves
Güemes
Guñazú
Irigoyen
Lubary
Maciá
Malbrán
Olaechica y Alcorta
Ovejero
Posse
Terán
Villanueva
Virasoro

En Buenos Aires, a los nueve días del mes de Septiembre de mil novecientos trece, reunidos en su sala de sesiones el señor Presidente y los señores Senadores al margen consignados con asistencia de los señores Senadores Castañeda Vega, Garramuno, González, Iturraspe, Mendoza y Ugarte, con aviso, y Peña con licencia, dice el

Sr. Presidente—Continúa la sesión con diez y seis señores Senadores presentes.

—Ocupa su banca el señor Ministro de Obras Públicas, doctor Carlos Meyer Pellegrini.

Sr. Presidente—Se va á dar cuenta de los asuntos entrados.

I

—Se lee:

La Sociedad Correntina de Hacendados solicita una ley que estimule la instalación de un establecimiento frigorífico para la exportación de carnes congeladas de los ganados de la provincia.

—A la Comisión de Agricultura.

—Julia F. Miranda solicita se salve el error del artículo 1.º de la ley que le acuerda pensión.

—A la de Peticiones.

—Ernestina Cabot de Reynolds solicita pensión militar.

—A la de Guerra.

Septiembre 9 de 1913

CAMARA DE SENADORES

Cont. 43.ª sesión ordinaria

—María A. Leoní Mandé de Lemos solicita aumento de pensión militar.

—A la misma.

—Corina M. Soldani solicita aumento de jubilación.

—A la de Peticiones.

—Mercedes A. de Campero solicita aumento de pensión militar.

—A la de Guerra.

—Alberto Schneidewind solicita autorización para aceptar y usar una condecoración.

—A la de Peticiones.

—Manuel Zemborain solicita aumento de jubilación.

—A la misma.

—Pedro García y Compañía ofrecen en venta la obra titulada «Bases para la organización política y económica de la Confederación Argentina», á 10 pesos el ejemplar.

—A la misma.

—María A. de Miguez solicita pensión civil.

—A la misma.

Sr. Presidente—Se va á continuar con la orden del día.

II

Sr. Posse—Pido la palabra.

En la orden del día N.º 23, figura un despacho de la Comisión de Presupuestos, en un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, solicitando un crédito suplementario, por la cantidad de 641.619 pesos moneda nacional, destinado á reforzar diversas partidas en el presupuesto de la Dirección de Correos y Telégrafos. Los gastos que deben atenderse con este crédito son de naturaleza tal, que no se podría continuar haciendo un buen servicio de correos si no fuera acordado inmediatamente.

El señor miembro informante, que ha de dar los antecedentes en este despacho, me ha manifestado que no tiene in-

conveniente alguno en hacerlo en la sesión de hoy. Formulo, por lo tanto, moción de preferencia para que este crédito sea tratado antes de entrar á la orden del día.

—Apoyada.

Sr. Presidente—Estando apoyada la moción del señor Senador por Córdoba, se va á votar si se trata con preferencia el asunto á que se ha referido.

—Se vota y resulta afirmativa.

III

Sr. Virasoro—Pido la palabra.

A la Comisión de Agricultura, señor Presidente, se han presentado nuevamente dos solicitudes sobre premios en tierras y estudiando los antecedentes de estos asuntos, ha encontrado que no le corresponde entender en estos pedidos.

Según el Reglamento del Senado, artículo 62, «compete á la Comisión de Agricultura dictaminar sobre colonias, minas, territorios, fábricas, industrias, venta y locación de tierras y en general sobre todo negocio que concierna al Departamento de Agricultura». Ahora, al Ministerio de Agricultura corresponde la administración, mensura y enajenación de la tierra pública; pero en ninguna parte se habla de la enajenación de tierras en forma de premios.

La Comisión cree que, en rigor, correspondería á la Comisión de Guerra, porque en la organización de los Ministerios, artículo 15, se atribuyen al de la Guerra: «recompensas y honores militares»; y al Ministerio de Marina: «recompensas y honores en la Armada».

Este asunto, propiamente, se refiere á recompensas por servicios militares. de manera que, por su naturaleza, correspondería á la Comisión de Guerra. Entonces, á pesar de que la práctica ha sido siempre que la Comisión de Agricultura dictamine sobre estos asuntos, creo que es necesario encarrillarlos en su verdadero camino; y por esta consideración, señor Presidente, pido que se recabe del honorable Senado una reso-

Septiembre 9 de 1913

CAMARA DE SENADORES

Cont. 43.ª sesión ordinaria

lución para saber á qué Comisión deben ser ellos destinados.

—Apoyada.

Sr. Presidente—El Senado resolverá por una votación si los asuntos á que se ha referido el señor Senador por Corrientes pasan á la Comisión de Guerra.

—Se vota y resulta afirmativa.

IV

—Se lee:

Honorable Senado:

La Comisión de Presupuesto ha tomado en consideración el Mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo solicitando un crédito suplementario de \$ 641.619 % destinado á reforzar algunos ítems del Presupuesto de la Dirección General de Correos y Telégrafos; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja le prestéis vuestra sanción al siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1.º Ampliase en la suma de (pesos 641.619 %) seiscientos cuarenta y un mil seiscientos diez y nueve pesos moneda nacional, el crédito de la ley número 9087, de Presupuesto General para el ejercicio de 1913, con destino á reforzar el Anexo B, Inciso 4—Dirección General de Correos y Telégrafos—en la siguiente forma:

Item	Partida	\$ m/n.
27	1	236.150
27	2	29.722
27	3	3.873
27	4	103.971
27	7	53.785
27	9	4.863
27	10	9.778
27	11	4.000
27	12	7.036
27	15	2.727
27	16	24.000
27	17	14.000
27	18	48.473
28	3	23.000
29	1	70.241
31	1	6.000

Art. 2.º Este gasto se hará de rentas generales con imputación á la presente ley.

Art. 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Salida de la Comisión, Septiembre 4 de 1913.

I. D. Irigoyen—Carbó.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1913.

Al honorable Congreso de la Nación:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse á Vuestra Honorabilidad, remitiéndole el adjunto proyecto de ley, por el cual se amplía el Crédito de la ley de Presupuesto vigente en el anexo correspondiente al Departamento del Interior en la cantidad de (pesos 641.619 %) seiscientos cuarenta y un mil seiscientos diez y nueve pesos moneda nacional, con destino á reforzar el Inciso 4, Ítems 27, 28, 29 y 31 de Correos y Telégrafos, por ser indispensable para atender los servicios de la citada repartición.

En los antecedentes que se acompañan, hará Vuestra Honorabilidad las razones que justifican este pedido.

Dios guarde á Vuestra Honorabilidad.

ROQUE SÁENZ PEÑA.

LORENZO ANADÓN.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de

LEY:

Artículo 1.º Ampliase en la suma de (641.619 %) seiscientos cuarenta y un mil seiscientos diez y nueve pesos moneda nacional, el crédito de la ley número 9087, de Presupuesto General para el ejercicio de 1913, con destino á reforzar el Anexo B, inciso 4—Dirección General de Correos y Telégrafos—en la siguiente forma:

Item	Partida	\$ m/n.
27	1	236.150
27	2	29.722
27	3	3.873
27	4	103.971
27	7	53.785
27	9	4.863
27	10	9.778
27	11	4.000
27	12	7.036
27	15	2.727
27	16	24.000
27	17	14.000
27	18	48.473
28	3	23.000
29	1	70.241
31	1	6.000
Total.....		641.619

Art. 2.º Este gasto se hará de rentas generales con imputación á la presente ley.

Art. 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LORENZO ANADÓN.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1913.

Señor Ministro:

Al elevar á V. E. en la oportunidad debida el proyecto de Presupuesto para el corriente año de 1913, esta Dirección General hacía presente, en la exposición de fundamentos en que aquél se acompañaba, que teniendo en cuenta las estrictas necesidades de los servicios de la Repartición, era indispensable que se sancionara un aumento de (\$ 2.083.980 ⁰⁰/₁₀₀) dos millones ochenta y tres mil novecientos ochenta pesos moneda nacional, sobre el del ejercicio anterior de 1912.

El aludido proyecto fué devuelto por V. E. para que se redujera el aumento propuesto en dos terceras partes, ó sea la suma de (\$ 694.660 ⁰⁰/₁₀₀) seiscientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta pesos moneda nacional, propósito que esta Dirección General cumplió elevando á ese Ministerio las planillas respectivas con las modificaciones que fué forzoso introducir y manifestando, al propio tiempo, los inconvenientes con que se tropezaría para realizar los servicios con la insuficiencia de los recursos que se asignaban á ese objeto.

Es de advertir, sin embargo, que el honorable Congreso de la Nación al convertir en ley aquel proyecto, sancionó un aumento sobre el año anterior de (\$ 1.300.000 ⁰⁰/₁₀₀) un millón trescientos mil pesos moneda nacional aproximadamente, suma que si bien podía salvar premiosas dificultades, no bastaba para cubrir las necesidades de todo orden de la Administración, tenidas muy en cuenta en la cifra que representaba el aumento con que se elevaba el proyecto á V. E.

Las previsiones de esta Dirección General se han cumplido en todas sus partes, á tal punto, que, al finalizar el año en curso, se estima, según cálculos minuciosos hechos con tal motivo, que habrá un déficit en la mayor parte de las partidas de gastos, que ascenderá á (\$ 641.619) seiscientos cuarenta y un mil seiscientos diez y nueve pesos moneda nacional, de acuerdo con el detalle que consigna la planilla adjunta, cantidad que, unida á la de (\$ 1.300.000) un millón trescientos mil pesos de aumento, obtenido sobre el de 1912, en el Presupuesto últimamente sancionado, y, contándose con la entrega de las diferencias por gastos desde Enero, que se ha gestionado de V. E., vendría á justificar, debidamente, el aumento de (\$ 2.083.980 ⁰⁰/₁₀₀) dos millones ochenta y tres mil novecientos ochenta pesos moneda nacional, que se pidieron para el Presupuesto de 1913.

Fundamentando más ampliamente la razón de ser del aumento que cada partida exige en la planilla adjunta, debo manifestar al señor Ministro que, en lo que respecta al ítem 27. Part. 1, destinada á Proveeduría General, la

cifra que se consigna es absolutamente indispensable para atender el mayor precio de los artículos en las diversas licitaciones públicas y privadas, la mayor cantidad de los mismos, para cubrir las necesidades de las nuevas oficinas creadas y á crearse, durante el año, y para la adquisición de ciertos elementos de que la Administración ha de proveerse, tales como máquinas de escribir y calcular, máquinas selladoras, cajas de hierro, alambres para el Telégrafo, relojes para el servicio de las oficinas que se han solicitado á Londres, por intermedio del señor Ministro Argentino, etc.

Las nuevas oficinas libradas al servicio público y las que en lo sucesivo han de habilitarse necesitan su dotación de muebles, siendo además indispensable la substitución de los destruidos y la reparación de los existentes, todo ello son razones que explican suficientemente la suma de refuerzo de la partida respectiva.

La partida 3 del mismo ítem necesita ser reforzada porque con ella han de atenderse las compras de animales de tiro, que es necesario reponer y aumentar, destinados á los carros que efectúan la recolección de la correspondencia de los pilares postales establecidos en la Capital Federal y es sabido que el valor de aquéllos aumenta de año en año.

Las subvenciones de las nuevas líneas de mensajerías y correos á caballo, que se hace necesario establecer á medida que se crean oficinas ó estafetas en los lugares apartados del territorio y las exigencias de los contratistas que hacen imposible la renovación de un contrato sin un considerable aumento de subvención, el servicio de automóviles con el alza de precio producida en los elementos de que deben hacer uso como goma, gomas, etc., son circunstancias que han sido tenidas en cuenta en la suma que consigna la partida 4 relativa á transporte de correspondencia.

En lo que se refiere á la partida 7, V. E. conoce ya, por haberlo puesto de manifiesto esta Dirección General en diversas oportunidades, las exigencias de los propietarios en lo relativo á los alquileres de las casas que la Repartición ocupa con sus oficinas y es de advertir que con el aumento de (\$ 3.000) tres mil pesos mensuales sancionados por la honorable Cámara en esta partida, se abonan (\$ 2.000) dos mil pesos por el nuevo edificio arrendado para ampliar las oficinas de «Expedición al Exterior» y otras á las que ha sido necesario darles más espacio por requerirlo imperiosamente los servicios que prestan.

En la partida 9, correspondiente á Gastos de Oficina, la cifra solicitada se explica, si se tiene en cuenta que todos los artículos de consumo para las dependencias, han experimentado un alza en su costo y que además es necesario elevar las pequeñas partidas que las oficinas tienen asignadas para sus gastos menores, proveyendo igualmente las necesidades que en ese sentido demandan las de reciente creación.

Ubiéndose aumentado el número de carteos y guarda hilos en el interior de la República, en localidades donde deben hacer á caballo el servicio de distribución de la correspondencia, recorrido y reparaciones de las líneas telegráficas, es necesario dotarlos de los elementos propios para que puedan cumplir sus

Septiembre 9 de 1913

CAMARA DE SENADORES

Cont. 43.ª sesión ordinaria

funciones, motivo por el cual se fija en la planilla respectiva el aumento en la partida destinada á ese fin.

La partida correspondiente á alumbrado, fuerza motriz, etc., para la Casa Central y Sucursales de la Capital, necesita el refuerzo que se le asigna, por cuanto se trata de gastos que oscilan con el consumo, como ha ocurrido en el año 1912, en que hubo que imputar erogaciones de ese concepto á sobrantes del Presupuesto del mismo ejercicio.

La elaboración del lacre y la tinta que efectúa la Repartición, aumenta anualmente en cantidad proporcional al aumento de las valijas de correspondencia, que requieren para su confección el empleo de los dos elementos citados, y el número de éstas crece, á la vez, con el aumento del servicio y las creaciones de oficinas, razones que determinan la mayor suma que se fija en la partida 12 del ítem 27.

El refuerzo de la partida destinada á uniformes del personal se explica por el natural aumento del personal que trae aparejado el desarrollo progresivo de los servicios.

La partida destinada á fletes de materiales, útiles y pasajes de empleados es insuficiente en la suma acordada para atenderse en debida forma el crecimiento de las necesidades de la Administración, originado por el mayor número de dependencias que han de servirse y el aumento y la movilidad del personal para el funcionamiento de las mismas.

El deficiente estado de conservación que ofrecen los pilares postales en la Capital Federal ha obligado á esta Dirección General á ordenar la pintura general de ellos, para colocarlos en condiciones higiénicas, proveyéndoseles de chapas indicativas del horario de las recolecciones, habiendo sido necesario además adquirir buzones de pared, más económicos que los pilares, aunque más inseguros, para dotar nuevas oficinas y servir radios recién poblados de la Capital, gastos todos que se hallan impagos, circunstancia que justifica plenamente la suma que se solicita para refuerzo de la partida con que deben cubrirse tales erogaciones.

El progreso de los centros de población en las distintas regiones de la República y las exigencias de buen servicio postal que aquél trae aparejadas, hacen indispensable reemplazar las funciones de la estafeta, limitada en su esfera de acción, por la oficina de Correos, habilitada más ampliamente á esos efectos, y en muchos casos por la oficina mixta, es decir, la que realiza los dos servicios, de correos y telégrafos, evolución que significa un aumento en los sueldos de los empleados que han de hacerse cargo de tales dependencias y en los gastos que su sostenimiento demanda. Si á ello se agrega la instalación de las nuevas estafetas que deben crearse en el transcurso del año, en virtud del aumento de estaciones ferroviarias en el país, queda demostrada la necesidad de la suma que esta Repartición consigna en el ítem 27, partida 18, para creación de nuevas oficinas.

Otras de las razones que fundamentan el refuerzo de la partida citada es que se han hecho en ella imputaciones de sueldos de nuevas oficinas creadas por presupuesto de este año, gasto que la Dirección General no puede cubrir de otra manera, por cuanto los fondos

acordados en el presente ejercicio sólo se han liquidado desde el 27 de Junio próximo pasado.

La suma que se gestiona para refuerzo del personal ordinario y extraordinario de Navidad, año nuevo y verano, partida 3 del ítem 28, se justifica si se tiene en cuenta que el servicio aumenta en proporciones que escapan á toda previsión y á todo cálculo, y como análoga cosa ocurre con el personal extraordinario que es necesario emplear en la estación de verano y para atender el movimiento excepcional de fin y principio de año, resulta evidente el aumento que en este rubro se gestiona para poder sufragar los gastos que van á originarse á la conclusión del corriente ejercicio.

Si ha de llevarse á cabo el propósito de esta Repartición de efectuar por lo menos una inspección ordinaria en todas las oficinas de la República, indispensable para controlar debidamente la buena ejecución de los servicios, corrigiendo deficiencias é instruyendo á los encargados de realizarlos, es forzoso contar hasta fin de año con el refuerzo en la asignación para viáticos de los inspectores que han de cumplir las comisiones que se les encomiendan á tales efectos, pues hasta ahora sólo ha sido posible concretarse á ordenar las indispensables, exigidas por la investigación de quejas ó denuncias que no admitían dilación alguna para su esclarecimiento.

La confección de la memoria anual, el aumento del tiraje en la edición del Boletín Mensual de la Repartición, único medio de instruir al personal sobre las resoluciones de la Dirección General y Direcciones respectivas, los dibujos y clichés que es menester hacer conocer del mismo para su mejor ilustración, y, finalmente, los avisos de licitación de compras y transportes, son todos detalles que explican suficientemente la mayor suma que, hasta finalizar el año, se demanda en la partida asignada para impresiones.

Terminado el examen analítico de las distintas partidas, cuyo refuerzo se solicita, cabe, Excmo. Señor, abundar en consideraciones acerca de la proporción en que se han desarrollado los servicios de telégrafos, que son los que, generalmente, insumen mayores gastos, por lo costoso de sus instalaciones, en comparación con los aumentos que han sancionado los presupuestos, desde tres años atrás.

Aunque es sólo una faz de los servicios confidados á esta Dirección, por lo sugente, conviene recordar, en este momento, para mayor fundamento de la petición que se formula, que, existiendo, al finalizar el año de 1910, sólo 628 oficinas, con servicio de telégrafos, y 64.150 kilómetros de línea en desarrollo, en la actualidad, el número de esas oficinas llega á 869 con 81.480 kilómetros de líneas es decir, 241 oficinas y 19.330 kilómetros de líneas más que en aquel año.

Una simple observación sobre la progresión establecida en el crecimiento de las partidas de gastos, formará la convicción de que éstas no han crecido en la relación que los servicios; todo ésto sin tener en cuenta que es mayor aun la proporción en el crecimiento de las oficinas y estafetas de correos.

Convencido, Excmo. Señor, de que quedan suficientemente demostradas las necesidades que la Repartición debe llenar hasta finalizar el año en curso, cierro esta exposición de fun-

damentos, permitiéndome solicitar de V. E. quiera dignarse prestar su preferente atención á este asunto, recabando á la brevedad posible del honorable Congreso de la Nación, la sanción de un crédito suplementario de (pesos 641.619 $\frac{1}{100}$) seiscientos cuarenta y un mil seiscientos diecinueve pesos moneda nacional, suma que se estima estrictamente necesaria para cubrir las erogaciones de la Administración.

Saludo á V. E. con toda consideración.

CARLOS ROSETI,
Salvador L. Carbo.

A. S. E. el señor Ministro del Interior:

Sr. Presidente—Está en discusión en general.

Sr. Irigoyen—Pido la palabra.

El Poder Ejecutivo, por mensaje de fecha 26 de Agosto último, solicitó del Congreso la ampliación del crédito de la ley de Presupuesto, en la parte correspondiente al Ministerio del Interior, por la suma de 641.619 pesos, destinada á reforzar el inciso 4.º, ítems 27, 28, 29 y 31 de la Dirección de Correos y Telégrafos; y los antecedentes que menciona el Poder Ejecutivo en ese mensaje, demuestran, de una manera evidente, que el proyecto de Presupuesto que el mismo Poder Ejecutivo pasó al Congreso para regir durante el año 1913, no era el resultado de un estudio serio y detenido de las necesidades de la administración.

De esos antecedentes resulta que el Director General de Correos y Telégrafos pasó al Ministerio del Interior el proyecto de Presupuesto para el año 1913, aumentando los gastos para este año, sobre el anterior, en la suma de \$ 2.083.980 $\frac{1}{100}$, demostrando que ese aumento era absolutamente indispensable para atender las necesidades del servicio público. El Ministerio devolvió esa nota indicando que debía limitarse el aumento á la tercera parte, y aquel funcionario así lo hizo, cumpliendo esas instrucciones superiores, pero haciendo la manifestación de que, para atender durante el año todos los servicios públicos, esa cantidad no iba á alcanzar.

El Poder Ejecutivo no tuvo en cuenta esa observación, al formular el proyecto de Presupuesto para 1913 y consignó en él el aumento de la tercera parte; pero la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, estudiando la

planilla de la Dirección de Correos, consideró conveniente hacer el aumento de un millón trescientos mil pesos sobre la suma proyectada por el Poder Ejecutivo, y, aun así, quedó siempre una diferencia de seiscientos y tantos mil pesos para poder cubrir todos los gastos del año.

Como la previsión de la Dirección de Correos se ha realizado, el Poder Ejecutivo, reconociendo ahora el error en que ha incurrido, solicita la ampliación del crédito en la suma de \$ 641.619 $\frac{1}{100}$.

La Comisión de Presupuesto cree que debe sancionarse ese aumento y no entra á dar explicaciones sobre cada una de las partidas porque la nota del Director de Correos, que está impresa en la orden del día, lo hace suficientemente; pero si alguna duda surgiera en la discusión, el miembro informante hará las aclaraciones pertinentes.

Sr. Presidente—Se va á votar en general.

—Se aprueba en general y en particular.

V

Sr. Presidente—Se va á continuar con la orden del día. Había quedado con el uso de la palabra el señor Senador por la Capital.

Sr. Maciá—Pido la palabra.

Voy á permitirme pedir al señor Senador por la Capital que me consienta hacer un momento uso de la palabra para explicar el por qué de algunas modificaciones que voy á introducir al artículo en discusión, tal cual se leyó en la sesión anterior.

Sr. Del Valle Iberlucea—Sí, señor Senador.

Sr. Maciá—Cambiano ideas con algunos señores Senadores más entendidos que yo en cuestiones de derecho, me han indicado que, tal vez, la segunda parte del artículo que yo proponía no tiene toda la estructura que jurídicamente le corresponde, y que puede ser perfeccionado en la forma. No he tenido ningún inconveniente en aceptar las indicaciones que me han hecho Senadores más competentes que yo, tanto

más cuanto que creo que tienden á asegurar mejor los intereses que todos queremos garantir; los intereses de los empleados y obreros.

Pido al señor Secretario que lea la nueva redacción del artículo que le he entregado.

—Se lee:

«Art. 11. Los empleados ú obreros que voluntariamente abandonen su servicio ó lo presen de modo que se interrumpa ó perturbe la continuidad y regularidad de la marcha de los ferrocarriles, serán considerados como separados del servicio y deberán ser sustituidos, perdiendo todo el derecho que hubieran adquirido á la jubilación, pensión ó retiro, á que esta ley se refiere y á los aportes que hubieran hecho sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pudieran haber incurrido.»

«Los empleados y obreros afectados por esta disposición tendrán derecho á reclamar ante la Junta creada por el artículo... Esta Junta, constituida en tribunal, resolverá en definitiva, en cada caso, y tendrá facultad para eximir total ó parcialmente de las sanciones establecidas en el párrafo anterior, si á su juicio el abandono del servicio hubiera sido producido por fuerza mayor ó causa justificada.»

Sr. Maciá.—Ahora, se me ha hecho la observación muy justa de que, constituida esta Comisión en junta ó tribunal transitorio de arbitraje, hasta tanto que la ley reglamentaria le dé su forma y funciones definitivas, no era justo mantener el artículo 8.º tal cual vino de la Cámara de Diputados y lo despachó la Comisión, y tal cual se sancionó con pequeñas modificaciones, porque las funciones son ya diferentes. Entonces, anticipo desde ya que si el voto del Senado es favorable al artículo que discutimos, pediré la reconsideración del 8.º para proponer una nueva redacción que le pido también al señor Secretario que lea, por si llegara el caso, para que los señores Senadores la conozcan

—Se lee:

«Artículo 8.º La administración de la Caja estará á cargo de una Junta de cinco miembros, nombrados por el Poder Ejecutivo en la siguiente forma: un Presidente con acuerdo del Senado; cuatro Vocales designados por mitad entre los empleados y representantes de

las empresas. Su organización y funciones serán fijadas oportunamente por la ley orgánica de la institución.»

Sr. Maciá.—Nada más. Quería hacer conocer esto á los señores Senadores para que no procedieran bajo la impresión del texto que se leyó en la última sesión.

Sr. Del Valle Iberlucea.—Debo rectificar, señor Presidente, no obstante la modificación propuesta al artículo en discusión, algunos de los conceptos vertidos en su discurso por el señor Senador por Entre Ríos, que en general ha coincidido con la argumentación del señor Ministro de Obras Públicas.

Ante todo, me felicito de la modificación que está ocurriendo en la manera de pensar del señor Senador por Entre Ríos, respecto de la naturaleza y amplitud de los debates sostenidos en esta Cámara. He visto con sumo placer, que en su discurso no sólo ha hecho consideraciones concretas, sino también sobre ideales abstractos, puesto que ha llegado á formular afirmaciones que yo creo erróneas, respecto de la nueva organización que está diseñándose en el régimen capitalista. Y me felicito también, de sus declaraciones, en cuanto considérase como un buen socialista, defensor de los intereses de los obreros y del gremio ferroviario, aunque sea en forma distinta de los socialistas avanzados como nosotros. Está sucediendo en nuestro país algo de lo que pasaba en Europa hace algunos años y lo cual refería en una interesante encuesta un ilustre periodista francés, Haret, que nos visitó hace poco tiempo. El decía en esa encuesta que entonces todo el mundo era socialista: lo era el Emperador de Alemania, hasta el Papa, y en fin hasta *Nini pat-en-l'air*.

Bien, señor Presidente; entrando á rectificar las ideas del señor Senador por Entre Ríos, en cuanto á lo que se refiere á mi exposición, debo decir que insisto en mi pensamiento de que la huelga está reconocida como un derecho en la Constitución de nuestra República. En verdad; no es indispensable un texto especial para el reconocimiento de determinados derechos que nacen de una dada organización económica y social, que derivan del régimen repu-

blicano representativo de gobierno. Hay una serie de disposiciones en la Constitución, referentes á los derechos y garantías individuales, desde la consagración del reconocimiento del derecho de propiedad hasta el reconocimiento de la libertad de trabajo, todas las cuales admiten este supremo y sagrado derecho del hombre para trabajar ó no trabajar, cuando lo crea conveniente para sus intereses personales ó para los intereses colectivos de los gremios á que pertenece. Este es un derecho esencial y fundamental reconocido por todas las legislaciones avanzadas, como estuvimos de acuerdo en reconocerlo respecto de las industrias privadas, tanto el señor Ministro de Obras Públicas, como el señor Senador por Entre Ríos, y como el Senador que usa en este momento de la palabra. Esto es indiscutible, y tan es así que el señor Senador por Entre Ríos admitía la existencia de este derecho en absoluto, limitándolo sólo en el terreno concreto de las circunstancias y en lo que se refiere á industrias que afectan al servicio público.

He notado alguna contradicción en las manifestaciones que sobre este punto hiciera el señor Senador por Entre Ríos. Me parece que en una parte de su exposición reconocía por completo el derecho, en absoluto de los obreros, y en otra parte desconocía este derecho, entrando en una serie de definiciones acerca de la huelga. Si no estoy equivocado, entiendo que el señor Senador por Entre Ríos ha recogido estas definiciones en un estudio que Gide publicó en un interesante libro titulado «Le droit de grève», editado, hace pocos años, por la Biblioteca General de Estudios Sociales. Parecía que el señor Senador por Entre Ríos, después de rechazar todas aquellas definiciones de la huelga, según las cuales ó era la libertad de no trabajar, ó era la combinación de los obreros para conseguir una modificación en el contrato del trabajo, ó una derogación ó suspensión del contrato del trabajo, parecía, digo, que admitía la definición de que era una compulsión, y, en este sentido, de acuerdo con el derecho y con la justicia estricta, rechazaba la huelga como un derecho. En mi opinión, la huelga no es ninguna coacción, ninguna compulsión

de parte de los obreros hacia los patrones, como tampoco lo es, de los obreros entre sí, es decir, de una mayoría respecto de una minoría. Es una situación de hecho, en virtud de la que los obreros de una determinada industria, ó de una determinada fábrica ó taller, resuelven solicitar una serie de mejoras de parte de los patrones y resuelven solicitarlas de una manera pacífica y legal. ¿Qué violencia existe en este hecho? ¿Hay alguna presión por parte de los obreros, que no disponen de la fuerza, sobre la voluntad y el consentimiento de los patrones para obligarlos á modificar el contrato del trabajo? ¿Existe, en realidad, el contrato del trabajo?

Yo no quiero entrar ahora en una disertación jurídica que suele rehuir el señor Senador por Entre Ríos, con razón, á veces, para establecer el concepto y el alcance del contrato de trabajo, si es que éste existe; pero debo manifestar que en absoluto no existe ese contrato, en virtud de que el obrero no goza de un consentimiento pleno para establecer con el patrón una relación válida de derecho; el patrón acepta en virtud de la ley de la oferta y de la demanda, ó no acepta, las condiciones del trabajo ofrecidas por el obrero, y en este sentido tiene completa libertad, mientras que el trabajador carece de esa libertad, por cuanto, en virtud de la misma ley de la oferta y la demanda, tiene que aceptar el precio de trabajo que le ofrezca el patrón por su mercancía. Entonces, pues, no puede afirmarse que en el sentido estrictamente jurídico, existe una relación de derecho en el contrato de trabajo.

Además, señor Presidente, los patrones disponen de medios suficientemente poderosos para imponer á los obreros las condiciones de trabajo. En general, siempre es mayor en las sociedades capitalistas la oferta que la demanda de brazos. Desde luego, tienen para sí esta ventaja los patrones. Hay otra, además, en cuanto disponen del favor legal, del concurso de los poderes públicos, allí donde no existe la verdadera responsabilidad política, donde no hay gobiernos democráticos. Y por fin, siendo más reducido el número de patrones que el de obreros, los primeros

pueden combinarse con mayor facilidad que los segundos, bien sea para imponer determinadas condiciones de trabajo á los obreros ó bien sea para vencer en una huelga. Es lo que decía un célebre sociólogo, un economista notable, el padre de la economía política; es lo que en el siglo XVIII afirmaba Adam Smith: «Los patrones siempre se encuentran respecto de los obreros en una coalición tácita.» La definición de Gide, á que hacía referencia explícitamente el señor Senador por Entre Ríos, parece admitir que hay siempre de parte de los obreros una compulsión respecto de los patrones para modificar el contrato de trabajo, para pedir reclamaciones favorables á ellos mismos.

Ahora bien, señor Presidente: ¿Hay también una compulsión en los obreros dirigida en contra de los patrones cuando éstos rebajan los salarios ó aumentan la jornada de labor? ¿qué coerción puede haber en ese caso de defensa legítima de los trabajadores? Un fabricante resuelve modificar los reglamentos de sus talleres; resuelve disminuir el precio de los salarios, de la fuerza de trabajo; resuelve aumentar la jornada de labor; y, entonces, en virtud de una reacción de intereses económicos ó materiales, suspenden el trabajo los obreros de la fábrica para solicitar del patrón que no tome semejantes medidas. Ahora, en este supuesto, señor Presidente, no existe una compulsión para modificar el contrato de trabajo de parte de los obreros en contra de los patrones: basta plantear esta cuestión para comprender que es, en absoluto, inexacta la definición de Gide respecto del derecho de huelga.

Pero, como decía antes, el señor Senador por Entre Ríos, estaba conforme en admitir, en cuanto referíase á las industrias privadas, la existencia del derecho de coalición, y, en cambio, no le admitía respecto de las industrias que podrían afectar los servicios públicos. Entiendo haber demostrado, en verdad, que no puede admitirse esta distinción desde el punto de vista constitucional, en nuestro país. Acaso, y no hago ninguna afirmación, señor Presidente, pueda admitirse lo contrario, en otras naciones. En Francia, por ejemplo, hay una disposición en el código penal, que

castiga la coalición de los funcionarios del estado que ejercen autoridad, y, en algunos momentos, ciertos reaccionarios de la República Francesa, pretendieron aplicar este artículo á todos los funcionarios y empleados del estado. Sin embargo, predominó la opinión, entre los que pensaban de una manera serena é imparcial, de que ese artículo del código penal no podía alcanzarse á todos los funcionarios del estado, sino á aquellos que estaban investidos de autoridad.

Conviene, desde luego, para comprender mejor las ideas, establecer la distinción entre el estado *órgano de gestión*, y el estado *órgano de autoridad*. Es sabido que el Estado es una entidad política y, en este sentido, su capacidad y sus atribuciones están regidas por el derecho público, bien internacional, ó bien constitucional y administrativo. En otro sentido, el Estado es una persona jurídica, es un sujeto de derechos patrimoniales, es una persona de existencia ideal, que puede ejercer determinadas industrias ó servicios; es así como existe un dominio público del Estado y un derecho eminente sobre las personas y bienes, y como existe un dominio privado del Estado.

Ahora bien, entre los funcionarios de una nación existen aquellos que ejercen una autoridad por delegación directa ó indirecta del gobierno para el cumplimiento de los fines sociales del Estado; y existe otra categoría de empleados, que no son sino agentes de las industrias ó servicios que el Estado realiza: estos últimos son agentes de gestión; los primeros, son agentes de autoridad.

Pues bien, en Francia reconocíase que los agentes de autoridad no podían ejercer el derecho de huelga; ésta es la opinión (nosotros no nos ocuparemos ahora de los políticos franceses, porque la actitud de ellos no obedece á razones jurídicas sino á circunstancias de hecho), de jurisconsultos como Berthelemy. Este escritor piensa que no puede aplicarse sino á los funcionarios que ejercen autoridad, el artículo correspondiente del código penal y rechaza la suposición de que pueda extenderse esa aplicación á otros funcionarios que no están investidos de autoridad y que son simples agentes de

gestión, como los empleados de correos y telégrafos, los maestros de escuela, etcétera, etc.

Pero bien, señor Presidente, en vista de que en nuestro Código Penal no existe ninguna disposición que castigue el ejercicio de la huelga, ni siquiera respecto de los funcionarios, sean éstos agentes de gestión ó de autoridad, no es el caso de argumentar con la doctrina que puede haberse invocado en Francia por los escritores ú hombres de Estado. En nuestro país los funcionarios de Estado están amparados por los derechos ó garantías individuales escritos en la Constitución Nacional. Pero suponiendo que pudiera aplicarse aquella distinción en nuestro país, entre los funcionarios que ejercen autoridad y los que están simplemente investidos de una gestión, lo cierto es que en ninguna forma podría retirarse á ninguno de ellos el derecho de coalición, porque no hay ninguna disposición de orden constitucional ó legal que autorice semejante restricción. Además, prescindiendo de los empleados de los ferrocarriles nacionales del Estado, que no están regidos, como decía anteriormente, por esta ley de jubilaciones y pensiones, tenemos que los empleados de las empresas ferroviarias nacionales no son funcionarios de Estado, de modo que no habrá necesidad de aplicar disposiciones restrictivas en cuanto á ellos, respecto del ejercicio del derecho de coalición.

Es cierto que el señor Senador por Entre Ríos afirmaba que en el caso de una huelga de obreros ferroviarios, no solamente estaban comprometidos los intereses de los obreros y empresas, sino también los intereses generales de la producción. En un párrafo expresivo, hacía referencia á la situación en que estaban colocados, durante una huelga, los agricultores del país, de quienes depende en grandísima parte, la producción ó riqueza nacional. Sostenía él que estaban afectados por una huelga de transportes ferroviarios y que, de consiguiente, era necesario dictar medidas para evitar la producción de estas huelgas, que perjudican á estos agricultores y también al país. En verdad, señor Presidente, de admitir esta distinción entre las huelgas de los simples obreros de las industrias privadas y las huelgas

de los empleados y obreros que afectan el servicio público, no habríamos de encontrar una línea de demarcación entre unas y otras y nos encontraríamos con dificultad para saber si una industria afecta o no á la producción nacional. No podría admitirse la teoría de que las industrias privadas son aquellas que interesan únicamente á obreros y patrones, que no comprometen para nada los demás gremios, al público en general, y no podría admitirse esa teoría en razón de que una huelga cualquiera, siempre que revista cierta importancia, que sea la huelga general de un gremio, afecta los intereses de la sociedad de una manera más ó menos directa, más ó menos mediata. Si suspendiéramos nosotros el tráfico de la ciudad para la conducción de las cargas de las estaciones á los puertos ó á las casas de negocio; si tuviéramos, en una palabra, una huelga de conductores de carros, podríamos decir que estaría afectado el interés social, de la misma manera que si hubiera huelgas parciales ó generales de empleados y obreros ferroviarios. Siempre hay una repercusión, cuando se produce una huelga, sobre la sociedad entera; de manera que no puede admitirse esta distinción á que vengo haciendo referencia.

Bien, señor Presidente; siendo esto así debemos mantener la disposición de nuestro derecho común, de nuestro derecho constitucional, que ampara, por igual, á los empleados de las industrias privadas y á los de las industrias públicas. Es necesario hacerlo así, para la buena economía social, para el mantenimiento de la paz en la industria. Es indispensable buscar los medios que puedan evitar la frecuencia de las huelgas, porque suelen traer inconvenientes; pero hay que tener en cuenta que ellas, como yo decía en la sesión anterior, son una manifestación del régimen capitalista; que, como lo decía con elocuencia el ilustre Jaurés, es la huelga un medio bárbaro de lucha social que corresponde á la barbarie de esta sociedad!!

Entiéndase que sólo por la transformación de la sociedad, organizando la producción en una forma colectiva para reemplazar la organización individualista del tiempo presente, podrían desaparecer las desinteligencias económicas

Septiembre 9 de 1913

CAMARA DE SENADORES

Cont. 43.ª sesión ordinaria

que conducen al ejercicio del derecho de huelga; pero mientras esto no suceda, debemos preocuparnos, como lo decía el señor Senador por Entre Ríos, de soluciones concretas y categóricas, y habrá de adoptarse la institución de tribunales mixtos de patrones y obreros de conciliación y arbitraje para resolver, en una forma transitoria, los conflictos que puedan plantearse entre el capital y el trabajo.

He visto la modificación que acaba de introducir en su artículo el señor Senador por Entre Ríos; pero esta circunstancia no modifica mi modo de pensar, en cuanto sostengo que, en una ley sobre jubilaciones y retiros, no debe legislarse en una forma impremeditada, sobre estos asuntos serios, dignos de honda y detenida meditación. Esto de instituir un tribunal para resolver conflictos entre empresas y obreros, no podemos hacerlo de una manera improvisada. Es necesario estatuir punto por punto todo aquello que se refiere á la constitución del tribunal, á las atribuciones que habrá de tener, y á las sanciones que habrán de revestir las sentencias de este tribunal.

Entonces, no podemos así, en una forma improvisada, constituir un tribunal de arbitraje, como sería esta Junta administradora de la Caja de Pensiones. Yo invitaría al señor Senador por Entre Ríos á que, en aras de la concordia, retirara su artículo y dejara que este punto sobre la solución de los conflictos que pudieran sobrevenir entre las empresas y sus empleados, sea resuelto por la ley orgánica de ésta que estamos sancionando. Antes de incorporar una solución semejante á esta ley, conviene que nos preocupemos de impulsar el desarrollo de los sindicatos obreros; y refiriéndome especialmente á las industrias que interesan á los servicios públicos, que atañen á los intereses generales de la Nación, yo decía esto, en mi discurso anterior, aludiendo á la situación orgánica de la sociedad de maquinistas y foguistas, á la cual hizo también referencia en su discurso el señor Senador por Entre Ríos. Y, si mal no recuerdo, al hacer esta referencia, indicaba que esta sociedad, de socorros mutuos al principio, habíase cambiado en sociedad de resistencia en contra de

las empresas ferroviarias y que ella había atentado contra la ley de ferrocarriles.

Ahora bien; yo debo rectificar esas palabras del señor Senador por Entre Ríos, manifestando que la sociedad de maquinistas y foguistas es una institución modelo, que debieran imitar los demás gremios de trabajadores. Es una sociedad, ciertamente, de socorros mutuos, pero que se preocupa, además, de la defensa de los intereses colectivos del gremio. Está constituida por todos los obreros inteligentes, por todos los obreros maquinistas de las empresas ferroviarias de nuestro país; ha tenido ocasión de intervenir en conflictos grandes con las empresas, que no fueron provocados por ella, sino por los directores de las empresas, que jamás quisieron atender y escuchar las reclamaciones de sus obreros. La última huelga general de los maquinistas y foguistas de los ferrocarriles de nuestro país, tuvo un proceso lento y moderado. Cuando los obreros resolvieron declarar la huelga, lo hicieron después de una larga tramitación, después de haber consultado á todas las secciones del país, después de haber madurado su pensamiento, después de haber requerido ante los Poderes Públicos, que, como las empresas permanecieron también sordos ante sus reclamaciones.

Aquí tengo un número de la revista de «La Fraternidad»,—creo que el último,—en que se habla de la última huelga, de la huelga parcial del Ferrocarril al Pacífico; y bastaría leer algunos párrafos del artículo respectivo, para darse cuenta de toda la prudencia de los maquinistas y foguistas antes de tomar una resolución conducente á la declaración de la huelga. En este artículo hácense algunas reflexiones sobre la manera cómo fué conducida y desarrollada esta huelga del Pacífico. Quien leyera las reflexiones hechas en este artículo, tendría la noción acabada de que estos obreros son capaces é inteligentes para el ejercicio de sus derechos, y que siempre toman en cuenta los intereses generales del país cuando van á plantear un conflicto con las empresas, mejor dicho, cuando van á resolver un conflicto que previamente han planteado las empresas ferroviarias.

Es «La Fraternidad» una institución bien meritoria, y bastaría para darse cuenta de ello, leer un suelto en que se publica el balance de la sociedad, desde el 1.º de Enero hasta el 20 de Agosto de 1913. Esta sociedad realiza obra solidaria entre los maquinistas y foguistas, tanto más si se tiene en cuenta que las empresas no se preocupan para nada, y que lo hacen en una forma ficticia solamente, de los intereses de sus empleados, tanto más si se tiene en cuenta que el Poder Ejecutivo no ha puesto en su gestión toda aquella actividad indispensable para que las empresas cumplieran con los compromisos contraídos para con los maquinistas y foguistas durante la última huelga ferroviaria!!...

Pues bien, según este balance, se han entregado subsidios en el tiempo indicado: por el artículo 20, «fallecimientos», 8.667.50 pesos; artículo 17, «enfermedades», 4.738.50; artículo 22, «falta de trabajo», 2.721.40; artículo 19, «crónicos», 2.610; artículo 23, «pasajes», 216.70; por «comisiones especiales», 1.917.21; ó sea un total general de pesos 20.925.31 moneda nacional.

Señor Presidente: el señor Senador por Entre Ríos, como también el señor Ministro de Obras Públicas, se colocaba en el supuesto de una guerra ó de una huelga general de transportes, que pudiera afectar la producción nacional, para reclamar la intervención del Estado con objeto de prohibir á los obreros ferroviarios el ejercicio del derecho de coalición.

En la sesión anterior, tuve ocasión de manifestar que el estado de guerra no era el estado de paz, y que, por consiguiente, no regían para uno las mismas disposiciones legales que para el otro. Pero, el señor Senador por Entre Ríos hablaba de que peor que un estado de guerra, sería la situación de nuestras industrias, de nuestra agricultura, de la producción nacional, en el caso de una huelga de empleados y obreros ferroviarios, y nos pintaba la situación lastimosa en que quedarían los agricultores, preguntando si ésto, por los intereses de ellos mismos ó por los intereses de la Nación no exigía una intervención del Estado en el sentido de referencia. Yo creo que siempre hay medios de parte de los Poderes Públicos

para evitar que las empresas, adoptando una actitud de resistencia ante las reclamaciones justas y legítimas de los obreros, suspendan el servicio de transportes, el servicio de pasajeros y de carga. Los poderes públicos deben obligar á las empresas á cumplir siempre con sus obligaciones. El señor Senador por Entre Ríos, citaba el hecho de que una suspensión del servicio ferroviario importaba un caso de fuerza mayor, que había sido declarado en la huelga de 1911, para salvar las responsabilidades de las empresas. Ahora bien, en mi opinión, el Poder Ejecutivo nunca debió dictar un decreto de esa naturaleza, porque era mostrarse favorable para una parte: era colocar todo el peso de la ley en favor de las empresas contra los obreros; ¡y ésta no era, ciertamente, la balanza de la justicia!

Respecto de los agricultores, no sería tan crítica la situación de ellos por la declaración de una huelga de empleados y obreros ferroviarios, como por otras circunstancias que deberemos estudiar oportunamente y las cuales han planteado en nuestro país ciertamente una cuestión agraria. El Partido socialista, como sus representantes en el Congreso, se preocupan de la suerte de los agricultores del país y se preocupan con razón, porque el porvenir de nuestra principal fuente de riqueza, ésto es, la agricultura, depende del mejoramiento de las condiciones económicas de los pequeños propietarios, de los pequeños agricultores, que están, también, entregados inermes, á la avaricia de los grandes latifundistas de la República.

Entrando, ahora, á la segunda parte del artículo propuesto por el señor Senador por Entre Ríos, debo manifestar, contrariamente á lo que manifestaba el señor Ministro de Obras Públicas, que la disposición no resuelve en ninguna forma la cuestión, aunque concede á los obreros y empleados, separados del servicio, el derecho de recurrir ante la comisión administradora constituida en tribunal arbitral. Se establecía por la primera forma de redacción del artículo el recurso de apelación, por decirlo así, para los empleados y obreros; pero mientras este recurso se tramitaba, se mantenía la separación del servicio. Este es un recurso *á posteriori*, que no

beneficia durante el tiempo de la suspensión á los empleados y obreros; y por otra parte, como es necesario resolver en una forma reflexiva la organización de este tribunal, el nombramiento de los miembros de la comisión administradora de la Caja, no podemos admitir que los obreros deban renunciar al ejercicio de un derecho porque van á encontrar siempre una garantía en un tribunal creado por esta ley.

Ahora bien, podría entrar en otras consideraciones, que suprimiré en obsequio á la brevedad, para refutar los argumentos del señor Senador por Entre Ríos, pero creo que al rectificar algunos conceptos del señor Ministro de Obras Públicas, sobre todo cuando se refería á la existencia de leyes extranjeras que castigaban la huelga de los obreros ferroviarios, lo hice de una manera suficientemente clara para convencer á mis honorables colegas que no es pertinente este artículo en una ley de jubilaciones y pensiones.

Quiero antes de terminar, referirme á algunos conceptos vertidos por el señor Senador por Entre Ríos, respecto á la emancipación que prometen á los proletarios los socialistas avanzados. Llamábale la atención el empleo de la palabra *proletario*; pero me parece, señor Senador por Entre Ríos, que esta palabra no envuelve un concepto que pueda lastimar á los trabajadores del riel en nuestro país. El proletariado es una creación del régimen industrial y todos aquellos que como agentes productores, tienen alguna parte en él, reciben el nombre de *proletarios*. Es cierto que en la vieja Roma los proletarios eran los desamparados por la ley, que no pertenecían á ninguna clase social, que no eran incluidos en el censo porque no tenían ninguna riqueza, salvo la riqueza de sus hijos, de su prole.

Bien, pues; yo creo que el socialismo científico y democrático tiene como misión histórica la de elevar la situación moral é intelectual de los trabajadores, y para esto es necesario ir preparando las condiciones materiales y reales de la vida en el presente momento histórico. A este fin responde la legislación social que reclaman los socialistas en los diversos países. ¡Ellos no han anunciado de ninguna manera, no han dicho en ninguna forma, que van á transformar

en absoluto el mundo para convertir á los poseedores en desposeídos y viceversa! Ellos no han prometido que han de conducir á los pueblos hasta la cumbre de Phasga, para que divisen desde allí, como Moisés, la tierra prometida, la nueva ciudad de la paz y de la justicia social!...

Los socialistas hacen propaganda consciente, perseverante é inteligente, en el sentido de dar al trabajador los medios indispensables para conquistar el derecho á la vida, de desarrollar aquellos elementos orgánicos que existen ya en el régimen capitalista y que podrán servir de base para formar la sociedad colectivista, aquella donde habrá una organización social y científica de la producción y de la distribución de la riqueza!

El señor Senador por Entre Ríos nos hablaba de Bismark,—el hombre nefasto,—que dictó las leyes de excepción en contra del socialismo en Alemania. Yo creo, señor Presidente, que la conducta de este político no debe ser imitada nunca por un hombre de gobierno, por un verdadero hombre de Estado, que estudie los problemas planteados en el presente momento histórico. Las leyes de excepción en Alemania produjeron un resultado contraproducente, pues en vez de contener el movimiento de expansión del proletariado, contribuyeron á su mayor desarrollo, de tal manera que el partido de la democracia social tiene hoy una mayoría de votos, con relación á los demás partidos, en el parlamento alemán.

Enfrente del Canciller de Hierro,—que en algún momento tuvo la visión de la necesidad de dictar una legislación obrera para satisfacer, en parte, las reclamaciones de los trabajadores,—debíamos, nosotros, colocar una figura hermosa y sublime, la de un luchador que acababa de morir: quiero referirme á Augusto Bebel, figura veneranda y venerada, figura respetada, aun por sus adversarios, respetada por el mismo Emperador de Alemania, que ha tenido ocasión de pronunciar sobre él, con motivo de su muerte, justicieras palabras. Este hombre insigne,—que fué condenado á dos años de fortaleza, no por delito de alta traición en contra de la patria, sino porque tuvo la valentía, en pleno Reichstag, de levantar su palabra, jun-

to con Leibnecht, para pedir que no fuera convertida la guerra en contra de la Francia en una guerra de conquista, anexándose al Imperio Alemán la Alsacia y la Lorena,—pronunciaba elocuentes palabras, hace poco tiempo, en la conferencia de la paz, reunida en Basilea. Conviene recordar sus palabras para darnos cuenta de la significación histórica del movimiento socialista en nuestra época.

Habían acudido á la catedral de Basilea, señor Presidente, representantes de las secciones de la Internacional de los diversos países; había repercutido en su recinto la voz apocalíptica y elocuentísima de Jaurés; habíanse alzado las voces elocuentes y poderosas de otros ilustres tribunos de la democracia socialista internacional. Habló Augusto Bebel, y bajo las bóvedas de aquella vieja catedral, que había visto todas las luchas religiosas del cristianismo, su voz profética anunció que los socialistas no querían sino la paz, la humanidad, la justicia, la verdad y el bienestar para las naciones, anunció que los socialistas esperaban que todos los hombres que no pensaban fuera de ese recinto de la misma manera, en un tiempo cercano habían de venir á incorporarse á las nuevas legiones para reconocer los mismos principios, las mismas ideas é iguales creencias!...

El régimen socialista no implica, como parece entenderlo el señor Senador por Entre Ríos,—establecer una colectividad de hombres generalmente dichosos, pero individualmente desgraciados. Ha recogido erróneamente el señor Senador por Entre Ríos, una opinión vulgar respecto del socialismo, opinión que consiste en afirmar que éste procura la nivelación de todos los individuos: están equivocados quienes piensan de semejante manera. Creo haber tenido ocasión de refutar esa opinión en este recinto anteriormente. El socialismo quiere la igualdad de los hombres, la igualdad económica, la igualdad en el punto de partida, y en este sentido está realizando una misión histórica, como la realizada por la burguesía en otras épocas cuando reclamaba la igualdad política y la igualdad civil de todos los ciudadanos de una nación. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, formulada

por la inmortal Asamblea Constituyente, reconoció los derechos que tendían á este fin, y ella fué hasta donde iba también en la sesión anterior el señor Senador por Entre Ríos: hasta la proclamación, al lado de los derechos de igualdad, de seguridad y de propiedad, del derecho de los pueblos y de los ciudadanos á resistirse en contra de la opresión.

El señor Senador por Entre Ríos piensa como Ritcher, que en una ocasión, combatiendo el socialismo en el Reichstag de Alemania, preguntó, con aire de triunfo, al referirse á la igualdad, á la nivelación absoluta de los productores en el régimen colectivista: «¿Quién nos va á limpiar los zapatos en la sociedad colectivista?» El socialismo científico no pretende construir ahora una ciudad perfecta, un régimen social con todos sus lineamientos y detalles, con una estructura completa y orgánica, sino que está realizando la misión colectiva de emancipar la inteligencia y la voluntad de los trabajadores para darles la conciencia de sus destinos, y sostiene que en el presente sistema de la producción burguesa, están desarrollándose energías y tendencias económicas que llevan á la sociedad capitalista hacia una nueva constitución social. En este sentido puede afirmarse con Millerand, que el colectivismo no es sino una secreción del régimen capitalista.

Bien, señor Presidente, en el régimen colectivista,—puede afirmarse, desde luego,—por el desarrollo prodigioso y admirable de la técnica, al mismo tiempo que por la dignificación del trabajo, no habrá oficios serviles; cada productor, cada hombre, cada miembro de la comunidad social sabrá manifestar las energías indispensables para la satisfacción de sus propias necesidades; y prescindiendo de la satisfacción de necesidades puramente individuales, la organización colectiva de la industria tenderá á una reglamentación científica de la producción misma, de modo que no se produzcan las crisis y consecuencias perturbadoras que producen actualmente en el régimen capitalista de la producción y distribución de la riqueza.

Quienes piensan de una manera vulgar acerca del socialismo, entienden que él quiere destruirlo todo, por completo,

de cuajo, en la sociedad capitalista, y ésto en una forma violenta, de la noche á la mañana; pero están equivocados, porque el socialismo si alguna vez formula la reconstrucción de la sociedad, bien sea en el campo económico, bien sea en el terreno jurídico, ha de ser para realizarla, no por medios violentos sino dentro de la ley y en procura de la paz social.

De las palabras del señor Senador por Entre Ríos pareciera desprenderse como una consecuencia necesaria, que los trabajadores no tendrían ningún interés en la producción de las mercancías en el régimen colectivista, en razón de que no existiría para ellos una remuneración proporcionada. Este sentido quiero dar yo á sus palabras, aquellas según las que la colectividad socialista estaría formada por una porción de hombres generalmente felices pero individualmente desgraciados.

En la sociedad colectivista habría una remuneración proporcionada para el trabajo. Es sabido que en este sistema la labor de los hombres, de los productores de la riqueza general, de la riqueza de la comunidad, sería remunerada según su jornada de trabajo.

Si alguien pretendiera que esta remuneración de la jornada de trabajo debiera hacerse solamente tomando el costo de producción de la mercancía, probablemente tendría razón en afirmarse que el socialismo es una doctrina desdóptica, en cuanto en semejante supuesto habría necesidad de imponer la residencia y un oficio dado á los trabajadores de un país. Pero, no, señor Presidente: el socialismo científico no quiere que la remuneración de la jornada de trabajo sea hecha teniendo en cuenta únicamente el costo de la producción, sino también el valor de uso. Como decía con razón Schæffle, ex ministro de Austria,—un distinguido economista que ha escrito un libro admirable donde expone la quinta esencia del socialismo desde un punto de vista imparcial y justo, no siendo él socialista,—la doctrina del valor social está destinada á tener, en el porvenir, en el desenvolvimiento de las naciones hacia el nuevo régimen económico, igual importancia que la que tuvieron algunas de las teorías de Rousseau en el advenimiento y en el desarrollo de la revolución francesa.

Habiendo entonces en el régimen colectivista de remunerarse el trabajo en una forma proporcionada, teniendo en cuenta, no solamente el costo de la producción, sino también el valor de uso, esto es, la utilidad social que la mercancía tendrá para los miembros de una determinada comunidad, podríamos afirmar que el estado socialista garantizaría en absoluto la libertad de trabajo, y que sólo en él, y en esas condiciones, con la organización colectiva de la propiedad, de los instrumentos de producción y de cambio, puede existir por completo la libertad económica del hombre, y, de consiguiente, las libertades civiles y políticas.

Sin embargo, espíritus prevenidos contra la doctrina socialista, llegaron á afirmar que ella es enemiga de la propiedad. También están equivocados. Quienes así piensan, recordarán seguramente lo que decía Proudhon: «¿Qué es la propiedad? La propiedad es el robo». Pero habrá de tenerse en cuenta que este apóstrofe del ilustre reformador, autor de la *Idea de la revolución en el siglo XIX*, fué explicado por él mismo. Explicaba este concepto de la propiedad, diciendo que para modificar, para substituir el régimen obligatorio de la ley por el sistema voluntario del contrato, habría que realizar lo que Hércules hiciera con el dragón mitológico: suprimirla no por la cabeza, sino por la cola, quitándole el beneficio y el interés. El mismo autor llega á afirmar, que lo que ponemos en lugar del Gobierno quienes pensamos en una forma avanzada, «es la organización de la industria; lo que ponemos en lugar de las leyes, son los contratos; lo que ponemos en lugar de los poderes públicos son las fuerzas económicas.»

Pero el socialismo científico y democrático no niega ni la propiedad general y social, ni la propiedad individual: quiere simplemente correlacionar el sistema colectivo de la producción con la tendencia colectivista del derecho de apropiación, para evitar todas las perturbaciones económicas, que son la consecuencia necesaria de la anarquía del régimen capitalista; pero mantiene la propiedad individual de la fuerza del trabajo, de la renta de trabajo, esto es, de la remuneración que puede ser acumulada,—sin llegar al sistema capita-

lista,—de todas aquellas jornadas de labor realizadas por los productores.

Voy á concluir diciendo algunas palabras respecto de un político á que hacía alusión el señor Senador por Entre Ríos, para recordar que no siempre piensan lo mismo los hombres desde el llano de la acción, que desde la cumbre del poder. En la sesión anterior tuve ocasión de manifestar que no podíamos traer á colación el ejemplo de Aristides Briand, á quien yo no considero, políticamente, un hombre honrado. El mismo señor Senador por Entre Ríos citaba las palabras que Briand pronunciara en el Congreso de 1899, y que repitiera en el de Amsterdam en 1903, palabras atrevidas, que no han sido pronunciadas, que no han sido consentidas por ningún socialista consciente, por los que interpretan de una manera realmente honesta y desinteresada las condiciones del momento histórico, por los que se preocupan sinceramente de la defensa de los intereses de la clase trabajadora.

El señor Senador por Entre Ríos, probablemente en honor del señor Briand, no quería citar otras palabras del mismo aventurero político, que llegó á pronunciar una frase condenada por él mismo después desde las alturas del Poder: dirigiéndose á los soldados del ejército francés, díjoles que cuando recibieran orden de los oficiales de hacer fuego contra los huelguistas, volvieran las armas contra ellos. Estas palabras de Briand, que ningún socialista admite, son de un hombre atrevido que buscaba solamente, por medidas extremas, captarse la voluntad popular para llegar al Poder. No debieran traerse á colación estos ejemplos, sino más bien recordar las palabras de los hombres que siempre han pensado en igual forma, consecuentes consigo mismos, con su partido y con la clase social á que pertenecen y cuyos intereses representan y defienden.

Dice Anatole France, en su libro «La isla de los penguinos», que al constituirse una vez en ese estado imaginario un nuevo ministerio, se dió la cartera de Obras Públicas á un socialista. Fortunato Lapersonne, «era entonces una costumbre, de las más solemnes, más severas y más rigurosas, y tengo la osadía de decirlo, de las más terribles y más crueles de la política, la de dar cabida en un

ministerio destinado á combatir el socialismo á un miembro del partido socialista.»

La citada obra de France, de este irónico académico socialista, que conocen los señores Senadores, no es sino una alusión á la situación social y política, en un momento dado, de la República Francesa. El personaje de que habla en esta sátira me parece que es este personaje de quien hemos tenido ocasión de ocuparnos el señor Ministro de Obras Públicas, el señor Senador por Entre Ríos y el que habla en este momento. El mismo France dice, al terminar este pasaje, que Lapersonne aceptó el ministerio sin consultar á su partido. Entonces, cometió una falta de honradez política; ¡y bien! yo creo que las palabras, los consejos, las opiniones y las ideas de un hombre de esta naturaleza, nunca deben citarse como argumento de autoridad.

En cambio, señor Presidente, ¿qué conducta ofrecen á nuestra consideración y á nuestro respeto los socialistas de otros países, de Holanda y de Dinamarca, por ejemplo, que han rehusado el poder, no obstante los atractivos y las sugestiones que éste podría tener para ellos? El señor Ministro de Obras Públicas nos hablaba, en la sesión anterior, de que en la legislación de los Países Bajos castigase también el delito de huelga de los obreros ferroviarios. Al recordar esta disposición legal, no nos dijo que estos obreros realizaron una huelga general verdaderamente formidable, con el propósito de mantener el derecho de coalición. Tampoco quiso decirnos que el autor de semejante disposición legal fué un gobierno reaccionario; tampoco quiso decirnos, por último, que ese gobierno reaccionario fué derrotado en las últimas elecciones por los liberales y los socialistas. Pues, bien; fué al plantearse una nueva situación política, que los liberales ofrecieron la colaboración, en el poder, á los socialistas; pero, ninguno de los dirigentes del partido de la democracia obrera hizo lo que hicieron en un tiempo Millerand, Briand y Viviani, es decir, saltar voluntariamente del otro lado de la barricada, abandonando su partido para entregarse á las concupiscencias del gobierno. Al contrario, los hombres caracterizados de la democracia socialista de Holanda al ser llamados al

gobierno, consultaron á los órganos representativos de su partido, que resolvieron que en las circunstancias presentes, no podía admitirse la colaboración ministerial del partido socialista en el gobierno de los Países Bajos. Esta es la conducta digna de servir de ejemplo y no la de aquellos hombres nefastos de la democracia socialista francesa que, por el solo hecho de haber abandonado los rangos y las filas de su partido, no merecen la confianza de ningún hombre político, cualquiera que sea el partido á que éste pertenezca!!

Hubo, hace algunos años, un célebre duelo oratorio en la cámara de diputados francesa entre Deschanel y Jaurés. Yo no soy partidario del primero; no comparto en ninguna manera sus ideas y sus puntos de vista en materia de legislación social; pero debo reconocer la convicción profunda que le anima y la honradez política de su conducta cuando defiende los intereses de la clase capitalista, cuando defiende los intereses del partido conservador; y, entonces, pues, las palabras que haya pronunciado en alguna ocasión este distinguido miembro del parlamento francés, cuando informara sobre el proyecto de retiros de los empleados de las industrias privadas, merecen, sí, el respeto de todos los hombres, cualquiera que sea la filiación política á que pertenezcan. Pues, bien; refiriéndose al argumento de la libertad de trabajo y la intervención del estado en las relaciones entre el capital y la industria, decía Deschanel en la cámara francesa:

«Es en nombre de la libertad que en Inglaterra, cuando la revolución del vapor trastornó todas las condiciones del trabajo industrial, se defendían las jornadas de trabajo de 17 horas, los salarios de hambre, la explotación homicida de la mujer y del niño. Es en nombre de la libertad que se trató de prolongar este régimen de arbitrariedad y de opresión en que el trabajador, privado del derecho de asociación y del derecho de sufragio, era arrojado, por una legislación de clase, fuera del derecho común. Es en nombre de la libertad que se trató de refutar las conclusiones de nuestras grandes encuestas industriales y las afirmaciones de los Sismondi, de los Blanqui, de los Villermé. Pero nosotros decimos que la primera de las libertades

humanas, es la libertad de vivir, y que el primer deber de una sociedad civilizada es garantirla á todos sus miembros».

¡Pues bien! ¡En nombre de ese derecho fundamental, que no necesita ser reconocido en la carta constitucional de ningún país; en nombre de este derecho esencial de los trabajadores de todos los pueblos y de nuestro país; en nombre del derecho á la vida, al trabajo, á la asociación, es necesario que la honorable Cámara no establezca ninguna, absolutamente ninguna restricción, para el ejercicio de la huelga, respecto de los empleados y obreros ferroviarios, y que, por el contrario, respete ese derecho, que es un derecho adquirido en la civilización moderna! ¡Y tenga en cuenta la honorable Cámara que las fuerzas y energías dispersas de los trabajadores, que son las que producen la riqueza social, deben despertar la atención de los poderes públicos de un país, para hacerlas desarrollar dentro de la ley, evitando todos los medios que conduzcan á la violencia, porque, como decía con razón Menger, —autor que debemos citar en este caso porque ha sido rector y profesor ilustre de la universidad de Viena—el nuevo derecho no va á reposar sobre la fuerza, sino que va á concluir precisamente con una situación de violencia en que el Estado, no es sino un órgano de coacción que, según decía Benoist, dicta la ley y cobra el impuesto, para mantener el dominio de la clase capitalista sobre la clase productora. El estado popular del trabajo va á substituir el derecho espontáneo, que reposa sobre la fuerza en el régimen capitalista, por el derecho de la libertad, que será el derecho reflexivo de la nueva humanidad, el que creará una nueva civilización dentro del orden, de la justicia y de la paz.

He terminado.

—Aplausos en la barra.

Sr. Irigoyen—Pido la palabra.

Me ha de permitir la honorable Cámara algunas consideraciones, después de haber escuchado la exposición del señor Senador por la Capital, en la que nos ha hecho una verdadera disertación sobre el socialismo.

Se ha producido en este caso, lo que

ocurre siempre en esta Cámara, cuando el señor Senador por la Capital hace oír su voz sobre cualquier asunto y sobre cualquier tema: que hemos tenido que escucharle mientras desarrollaba una larga argumentación, para hablar de paso, de cuestiones que no están en debate, pero que están dentro de las ideas revolucionarias del señor Senador.

Pero es el caso que los Senadores que no participamos de esas ideas, si bien hasta ahora nos hemos limitado a escucharle, porque queríamos dejarle en completa libertad de acción para que expusiera las suyas en la forma que mejor le pareciera, no estamos dispuestos á seguir observando el mismo temperamento en lo sucesivo, cada vez que al señor Senador se le ocurra hablar-nos sobre el mismo tema; y tenemos que decirle que no podemos permitir que la banca legislativa se utilice como tribuna política; y tenemos que decirle también que es muy original, por cierto, y muy digna de llamar la atención, la actitud que vienen observando los legisladores socialistas desde que se incorporaron al Congreso, porque están ejercitando una acción que más parece dirigida á desarrollar un verdadero programa de propaganda política, que á otra cosa.

Parecería, señor Presidente, que en el desarrollo de esa acción, quisieran poner todo su esfuerzo para adoptar actitudes airadas é intemperantes, con demasiada arrogancia muchas veces, y en otras, con una excesiva altanería, para encontrar malo y para criticar acerbamente todo lo que existe; para atacar con violencia á todos los que no piensan como ellos y hasta para deprimir á los demás partidos políticos, y á las instituciones del país, á fin de poderse presentar ellos mismos como los únicos salvadores de la patria y como los únicos capaces de conseguir nuestro mejoramiento social y político.

Parecería, señor Presidente, que para ellos no hay nada ni nadie bueno, que todo es malo, que todo está pervertido y que todo debe modificarse, y escuchándolos, tiene uno necesariamente que recordar el caso del ciudadano ateniense, de quien nos dice la historia, que habiendo votado por el destierro de Aristides, aquel mandatario de Ate-

nas conocido por «El Justo», daba razón de su conducta, diciendo lo siguiente: «Estoy cansado de ver el anhelo con que pretende Aristides, á quien no conozco, sobresalir sobre los demás, con su apodo de «El Justo».

Los socialistas, señor Presidente, por las mismas razones que daba el ciudadano ateniense, pretenden arrasar con todo lo que existe, sin duda, porque están cansados de oír decir que el país ha progresado enormemente en estas últimas décadas sin la ayuda, sin el auxilio y sin la acción del Partido Socialista.

Mientras tanto, señor Presidente, todos los demás, todos los que no participan de las ideas socialistas, todos los que estamos comprendidos dentro de su propaganda violenta, no hemos tenido hasta ahora la ocurrencia de preguntar quienes son estos apóstoles de la ideología, que pretenden con un soplo purificador, cambiar completamente nuestro organismo política y social; y sin embargo, señor Presidente, la contestación sería enteramente sencilla y fácil, porque ella surge espontáneamente á los labios: son unos pocos, muy pocos teorizadores; vienen de halagar y fomentar las pasiones del pueblo y pretenden, ellos, que no son obreros, ser los directores del Partido Socialista, que levanta como bandera, el mejoramiento de las clases obreras y trabajadoras, y por último aspiran, señor Presidente, al Gobierno del país para ese partido.

Pero es el caso, señor Presidente, y debemos decirlo con entera franqueza, que el Partido Socialista, entre nosotros, no tiene la cultura intelectual suficiente para poder aspirar al gobierno del país, y no la tiene porque está formado por obreros y trabajadores, por hombres pobres, necesitados y humildes, que no han tenido ni el tiempo, ni la oportunidad, ni los medios para ilustrarse y cultivar su inteligencia, porque han debido dedicar todos sus esfuerzos, sus energías y su acción, al trabajo rudo y á la lucha por la existencia, que todos sabemos, es dura, es fuerte y es tenaz, y no deja momento alguno disponible para el estudio.

Los ciudadanos, afiliados al Partido Socialista, en su mayor parte, casi en su totalidad, y posiblemente con la so-

Septiembre 9 de 1913

CAMARA DE SENADORES

Cont. 43.ª sesión ordinaria

la excepción de los dirigentes y de algunos obreros inteligentes, no tienen la preparación intelectual suficiente para poder comprender y para poder dominar las grandes y difíciles cuestiones involucradas en los múltiples problemas políticos, sociales, morales, económicos y financieros, que tiene que estar resolviendo el Gobierno á cada instante; y, por consiguiente, esos hombres de preparación insuficiente no pueden ejercer el gobierno.

Por otra parte, el Partido Socialista no puede pretender el gobierno del país, porque no es una agrupación que tenga las tendencias, los ideales y los afectos de la Nación, sino una agrupación política, revolucionaria, que profesa las ideas internacionalistas, que están completamente en pugna con nuestro nacionalismo; una agrupación que antepone las conveniencias y los intereses del mismo y de las clases obreras á la idea grande y noble del patriotismo; una agrupación que antepone el trapo rojo, que es el símbolo de la violencia, al pabellón azul y blanco que es el símbolo de nuestras glorias; una agrupación que antepone el himno socialista, que es el canto á la turbulencia, al himno argentino que es el canto sagrado de la patria.

No puede tampoco, señor Presidente, el Partido Socialista pretender el Gobierno del país, porque es un partido compuesto de extranjeros refractarios á todo sentimiento de unión con los hijos del país, extranjeros entre los cuales existen muchos que son agentes del socialismo europeo, y entre nosotros, factores perniciosos, que han venido á infeccionar nuestro organismo de pueblo sano, de pueblo joven, con el virus de enfermedades naturales en los pueblos viejos y de organismos minados por la degeneración; agentes que, por otra parte, sólo han traído como aporte, sus sentimientos enconados para con la sociedad.

Y por último, señor Presidente, el socialismo no tiene derecho para pretender el Gobierno del país, porque es una agrupación que gira constantemente dentro de su propia órbita, dentro de un círculo vicioso, limitado por sus tendencias disolventes y violentas y que, por consiguiente, es un elemento perturbador, que está en perpetua discordan-

cia con la marcha serena y tranquila de la vida nacional. Por lo tanto, si ese partido llegara al Gobierno, sería contra los intereses morales y materiales de la República.

Pero hay más, señor Presidente: los hombres agrupados alrededor de la bandera socialista, por razón de las necesidades y de las privaciones que sufren en su inmensa mayoría, viven perpetuamente enconados contra la sociedad y contra los favorecidos por la fortuna, porque los teorizadores y los propagandistas les hacen entender que hay una injusta distribución de la fortuna, como una consecuencia natural y lógica de la mala organización de la sociedad; y entonces, esos hombres ven en el socialismo únicamente lo siguiente: una tendencia ó una doctrina que ha de llevarlos á la modificación de la organización social, á la nivelación de clases y al mejoramiento de su situación. La idea de la modificación y organización social no es nueva, no es el resultado de una evolución, ni una concepción moderna; ha existido en otras épocas desde el principio de la humanidad, en que se ha perseguido mejorar la situación del pobre. Pero mientras no se modifique la naturaleza del hombre, sus pasiones y su egoísmo, ha de mantener siempre la lucha entre el capital y el trabajo, entre las clases necesitadas y las acomodadas, entre el pobre y el rico.

Las doctrinas que sostuvo Platón en su República ideal y las que proclamó Jesucristo, con las que revolucionó al mundo, están inspiradas en el mismo propósito de mejoramiento de la situación del pobre, que hoy se atribuyen los socialistas y con las cuales arrastran y seducen á las masas trabajadoras. No son, pues, una novedad; esa aspiración ha existido en todas las épocas, porque siempre ha habido desgraciados que persiguen una mejor distribución de la fortuna; y ese anhelo permanente es el que explotan los agitadores y teorizadores que embaucan á las masas pobres, asegurándoles que ellos les van á mejorar su situación. Sin esta ilusión, el Partido Socialista no existiría.

La base principal ó más bien dicho la base única del socialismo, es la ideología de los teorizadores; el socialismo es, en verdad, la aspiración del pobre á ver

convertido en realidad un anhelo que puede sintetizarse en esta fórmula: buenos trabajo y más satisfacciones.

Es alrededor de esa fórmula que los declamadores hacen su propaganda y reclutan adeptos, haciéndoles creer que el socialismo va á modificar como por encanto la organización de la sociedad, la nivelación de las clases y á mejorar las condiciones de los pobres.

Es indudable que esta propaganda es peligrosa, porque puede echar raíces en el alma del pueblo, pues, cuando se vive permanentemente entre las masas, cuando se les habla siempre en la misma forma, empleando las mismas palabras y se emiten las mismas ideas, es fácil conseguir que esas masas adquieran el mismo pensamiento.

El estudio de la psicología de las multitudes nos dice que los propagandistas de ciertas doctrinas obtienen fácilmente las simpatías y hasta el cariño de las multitudes, halagándolas y fomentando sus pasiones, sus prevenciones y hasta sus odios, y que, cuando se llega á conseguir ese cariño, es fácil hacerlas llegar á situaciones extremas, á las que van con sacrificios, con heroísmos y hasta con abnegación.

Si esto es cierto, será necesario reconocer que manteniéndonos, los que no profesamos las ideas socialistas, en la situación de pasividad en que estamos hasta ahora, en presencia de la propaganda violenta y tenaz del socialismo, contribuiremos á que las ideas de anarquía y de desorden se posesionen del alma de las masas, interrumpen el progreso del país y nos arrastren quizás á la peor de las tiranías, que es la tiranía de las masas, aquella que por los veces, en 1793 y en 1871, llevó á la Francia al gobierno de la Comuna con todos sus horrores.

Dejemos, señor Presidente, tranquilos á los trabajadores y á los obreros, que demasiado tienen de qué preocuparse, apartando diariamente los inconvenientes que se les presentan en la lucha por la vida; dejémoslos tranquilos entregados al trabajo honrado y á la labor perseverante, con lo que están contribuyendo al engrandecimiento del país y al crecimiento de nuestra riqueza, porque de esa manera contribuyen al aumento del bienestar general, y, por consiguiente, al bienestar de ellos

mismos; y en vez de envenenarles el alma, con ideas malsanas, con ideas de desorden, de anarquía y de disolución, en vez de ahondar abismos y fomentar odios de clases, aunemos nuestras fuerzas y, nuestra buena voluntad como legisladores é inspirándonos en altos sentimientos patrióticos y en altos sentimientos humanitarios, proyectemos y sancionemos leyes para mejorar la situación de todas las clases necesitadas y así haremos obra grande, buena, patriótica y humanitaria.

He dicho.

—Muy bien!

Sr. Maciá—Pido la palabra.

Muy contra de mi deseo, porque el estado de mi salud no es bueno, creo que para mí es un deber rectificar algunas aseveraciones hechas por el señor Senador por la Capital, tanto en esta sesión, como en la anterior.

Empiezo por declarar que la modificación que nota en mis ideas el señor Senador, debe ser más aparente que real. Yo me siento exactamente el mismo, pensando siempre de idéntica manera, y si han podido influir en algo las modificaciones que he presentado al artículo en discusión desde la sesión anterior, para que él tenga esa opinión, el hecho se explica sencillamente, porque, dentro del pensamiento con que el primer día presenté la modificación, está la que presento ahora, redactada por otros que entienden las cuestiones jurídicas mejor que yo, pura y simplemente, pero siempre con la misma tendencia, el mismo pensamiento y el mismo propósito.

Yo entiendo que esa Comisión ó esa Junta de esta ley, es un tribunal transitorio para dirimir las cuestiones que puedan suscitarse respecto al derecho de jubilación que empieza á crearse, desde que esta ley se sancione, para ser convertida en el tribunal definitivo que se establezca en la ley orgánica. De manera que no veo en qué funda el señor Senador la indicación de que voy cambiando de opinión. No. Si lo he dicho, tal vez no he expresado bien el pensamiento. Yo no he dicho que soy buen socialista: nó; si yo no soy ni bueno ni malo, porque no soy socialista, ni creo que, para ser defensor de buenas

causas, sea indispensable ser socialista. Lo que digo es que soy partidario de aquellos principios del socialismo que me parecen buenos y no de aquellos que considero exageraciones. Yo podría decir que he pasado mi vida de médico, sirviendo una acción social: como médico de hospitales sirviendo gratis; médico de sociedades de socorros mutuos; médico de todos los pobres de mi pueblo, haciendo un socialismo práctico, real, aunque no estuviera afiliado á ninguna escuela. Soy amigo de los buenos principios del socialismo, que son, en mi modo de entender, estar siempre dispuesto, no sólo á ayudar teóricamente, sino á hacer sacrificios en obsequio del necesitado; no en decir que hay otros que necesitan la contribución de los hombres que están en disposición de prestar un servicio, sino en prestarlo; y si el mío no ha podido ser pecuniariamente considerable, tengo á orgullo haber sido elemento eficaz de solución de situaciones afligentes, en la asistencia á domicilio, llevándoles todos los recursos que un médico filántropo, amigo de los pobres, puede llevar. Ese es mi socialismo.

¿Tiene algo que ver ésto con el socialismo de escuela? Si tiene, que me acepten así, y si no, me significa poco, porque no son las escuelas sino mi conciencia la que determina mi conducta. Esa es mi situación en este caso; de manera que esa apreciación de si soy buen ó mal socialista está fuera de lugar y dejo perfectamente explicada cuál es mi posición.

Pero llevada esta cuestión muy lejos de sus verdaderos términos, me parece que conviene que nos ocupemos del punto concreto de que se trata. En ese sentido, yo quiero rectificar aseveraciones del señor Senador, que no sería conveniente que siguieran prosperando en una Nación como la nuestra, que tiene su Constitución y su legislación muy previsora y bien establecida.

He encontrado con sorpresa en el discurso del señor Senador este párrafo que voy á leer textualmente: «Los derechos y garantías individuales establecidos en la Constitución Nacional son iguales para todos los habitantes del país y no podrá la lógica más caustica ni el criterio más arbitrario

«cuando quiere interpretar con libertad el espíritu y la letra de nuestra Constitución, negar que esos derechos y esas garantías individuales han sido establecidos por la Constitución para todos los habitantes de nuestra República.»

Le presento al señor Senador sus mismas palabras. En ese discutido, en ese ponderado derecho de huelga, no hay más derecho que el del huelguista, no hay derechos de otros, y entonces le aplico sus palabras á los agredidos y perjudicados por las huelgas.

Dentro de esta teoría estoy yo y por eso me complazco en citar las palabras del señor Senador, porque de ellas se deriva mi doctrina y no la suya.

He sostenido, señor Presidente, que estamos dictando una ley de interés general, y el señor Senador decía en la sesión anterior que, ni aun en virtud de ese interés, puede el Gobierno ejercitar verdadera coacción en contra del derecho que goza el obrero, como un derecho individual, el de cruzarse de brazos, cuando así convenga á sus intereses, á su labor, á su salud y á su vida.

Bien, señor, esto es perfectamente absurdo.

El obrero no debe cruzarse de brazos cuando su salud se lo exija, porque lo que debe hacer es curarse; el obrero no debe cruzarse de brazos cuando sus intereses lo exijan, sino en el caso de que con ello no lesione intereses ajenos, que está obligado á contemplar por la situación que el mismo se ha creado; el obrero no tiene derecho á cruzarse de brazos cuando á la labor le convenga, sino cuando la labor no demande trabajo, porque entonces no hay necesidad que emplee sus brazos en la labor. Ahora cuando se lo demande su vida, como derecho innegable, debe defenderla, pero entonces tampoco debe cruzarse de brazos.

Estas son frases destinadas á hacer efecto; son frases en el aire; son frases que envuelven conceptos falsos y que hay que desentrañar en la práctica para salvar intereses que hay en juego y para demostrar que no todo lo que se predica como doctrina es exacto.

La verdad, señor Presidente, es que un hombre que ha comprometido su trabajo no tiene derecho de cruzarse de

brazos, sino cuando sus contratos se lo permitan ó cuando pueda separarse del trabajo por los medios que correspondan y que tenga para su defensa, pues lo que se diga en contrario son exageraciones de doctrinas que no conducen sino á asentar otras doctrinas más falsas.

Me ha dolido un poco, en el discurso del señor Senador, la alusión un poco violenta á nuestro actual Gobierno, inculpándole de que tenemos un Gobierno que se preocupa del interés de los poderosos, pero jamás del interés de los humildes.

Me parece, señor Presidente, que la historia del presente Gobierno prueba lo contrario, pero aunque esa inculpación sea al Poder Ejecutivo, los miembros del Parlamento podemos declarar que el hecho de estar ocupándonos de estas leyes prueban que la inculpación no es cierta.

Que procedamos con distinto criterio y que tengamos ideas opuestas, está bien; pero el deber de los hombres es la sinceridad y buena fe, y yo sostengo que con mis doctrinas, beneficio más al obrero, porque le pongo su verdadera situación de manifiesto y así le aseguro mejor su presente y su porvenir.

Puede ser que al hablar de la diferencia del estado de guerra y del estado de paz, cuando en la sesión anterior me refería á la situación creada á la República por una huelga general de ferrocarriles, haya exagerado un poco; pero me parece que con respecto á los derechos del Gobierno en caso de peligro y de interés general, no he exagerado nada. ¿Cómo proceden los gobiernos en caso de una epidemia que invade una gran extensión de territorio? ¿Cómo proceden los gobiernos en el caso de cualquier otro peligro ó calamidad de esa naturaleza? Antes que nada, vigilando, asegurando y garantizándose de todos los medios de buen servicio; de manera que si la comparación con el estado de guerra no es materialmente exacta, tenemos que convenir, señor Presidente, en que, moralmente, es el mismo caso, porque la inmensa mayoría de los daños que se producen en el estado de guerra, se producen en el caso de una huelga general de ferrocarriles. Y no he hablado de huelga parcial, sino de la general; he hablado de la vitalidad del país, de la

vitalidad de sus intereses y de la necesidad de salvaguardar esa masa enorme de intereses afectados por ella.

Pero llegamos á la aseveración principal, que el señor Senador repetía hoy: «el derecho de huelga, nace del derecho de asociación». Yo creo, señor Presidente, que, cuando se dictan leyes, y que, cuando al dictar leyes se predicen doctrinas, es necesario hacer las leyes con sujeción á nuestro gran libro, la Constitución, y predicar las doctrinas en entera conformidad con ella; de manera que, cuando se les dice á los obreros, que la huelga nace del derecho de asociación, según la Constitución, es necesario leerles la Constitución entera.

Leamos el artículo 14, á que indudablemente el señor Senador se ha referido, que dice: «Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme á las leyes que reglamentan su ejercicio»—(perdónenme los señores Senadores, que les recuerde lo que ellos saben de memoria, porque este artículo lo tienen todos en la mente; pero, también es preciso que nosotros nos defendamos un poco de la atmósfera que nos echa encima la propaganda, de reaccionarios y recalci-trantes, y que se nos quiere atribuir, y para que también oigan los obreros, que muchas veces á ellos se les predica un falso derecho, predicándoles una Constitución incompleta)—«gozan de los derechos siguientes, conforme á las leyes que reglamentan su ejercicio»; de manera que no hay derecho de invocar la Constitución, sin invocar simultáneamente la ley reglamentaria de los derechos que la Constitución crea.

Sr. Del Valle Iberlucea—Pero esa ley no puede alterar ni la letra, ni el espíritu de los derechos.

Sr. Maciá—¿Cómo dice el señor Senador?

Sr. Del Valle Iberlucea—Que no puede nunca alterar el derecho fundamental; la reglamentación es una cosa, y el derecho otra.

Sr. Maciá—Es un principio elemental de derecho, pero yo voy á lo que voy: El señor Senador asegura crudamente que el derecho de huelga nace del derecho de asociación: yo se lo niego. Si es un derecho la huelga, ya debiera estar reglamentado, y por de pronto no lo está.

Dice la Constitución: «de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar; de peticionar á las autoridades» (y véase que la Constitución, antes que estos grandes conflictos existieran entre nosotros, apuntaba un medio de solucionarlos). Y sigue el artículo: «entrar, permanecer y salir del territorio, publicar sus ideas por la prensa, sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; *de asociarse con fines útiles...*» He aquí la palabra que se les calla á los obreros.

Entonces, yo pregunto: ¿esta utilidad de que habla la Constitución, es la utilidad evidente de que habla el señor Senador por la Capital, cuando dice que la huelga es útil al obrero y que es el único medio de defensa que tiene? No, señor Presidente; esta utilidad de que habla la Constitución, es la utilidad general del país, en que la asociación se constituye para verificar un progreso, para mejorar una situación por los medios naturales y legales.

Bien, señor Presidente; yo sigo dentro de la teoría de que, sostener el derecho de huelga en los casos ordinarios que puedan ser sometidos á la legislación y á la reglamentación, es un absurdo.

En la sesión anterior yo preguntaba al señor Senador, qué entendía por coalición; y él me contestó terminantemente «el derecho de huelga». Entonces pienso que, yo que había declarado en la discusión que todas las modificaciones que había proyectado al despacho de la Comisión garantían ó respetaban para los obreros el derecho de asociación y de coalición, debo modificar un poco mi opinión, porque, como sucede con «proletariado», para la doctrina socialista las palabras españolas han cambiado de significación. Coalición, hablando con el lenguaje ordinario con que hablan todos los hombres que no tienen obligación de especializar cada palabra en un tecnicismo determinado, yo he entendido que es «reunión»; pero es que hay una trampa en esta palabra. Hablando sinceramente, los señores socialistas debían haberle suprimido la *a* y haberle cambiado la *c* en *s* y decir «colisión», porque entienden «coalición» como derecho de huelga, lo que quiere decir derecho de «colisión». En-

tonces, yo me hubiera guardado muy bien de asegurar que este proyecto que he presentado mantiene incólume el derecho de los obreros á la asociación y á la coalición, porque no podría entender en esa forma el derecho de colisión.

He reconocido la huelga y sigo reconociéndola, como sigo reconociendo el derecho á la revolución cuando, ante la tiranía, la situación se ha hecho tal que se ha suprimido, por ejemplo, el imperio de la ley y el poder de los jueces para aplicarla. Cuando la tiranía ha suprimido todo, entonces el pueblo tiene derecho á todo y, mientras las leyes subsistan, mientras los jueces subsistan, nuestra regla es la que establece la Constitución: nadie gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes, lo que quiere decir que nadie se hace justicia por sí mismo: á todos se la hacen los jueces. De manera que, señor Presidente, haciendo modificaciones de palabras, cambiando hechos al presentarlos, se pretende conciliar teorías que, en realidad, son inconciliables.

El señor Senador por la Capital decía que, por las huelgas, los obreros resuelven *solicitar* de los patrones las condiciones que necesitan para mejorar su situación; pero solicitan imponiendo, solicitan estableciendo los perjuicios del paro y, como yo no he de entrar en todas las legislaciones y en todos los casos, sino en los casos de los ferrocarriles, solicitar imponiendo el paro, es solicitar imponiendo el perjuicio al país, es imponer interrumpiendo un servicio vital y, á este respecto, conviene agregar consideraciones que, en la sesión anterior, no hice.

¿Hasta dónde llega el derecho de huelga que se proclama? Hay, en estas huelgas un fenómeno curioso, importantísimo: el de la solidaridad. Un grupo de obreros se declara en huelga porque tiene interés en defender un derecho, y otro grupo de obreros, enteramente extraño á la cuestión, se declara también en huelga para favorecer la fuerza que ejerce ese grupo ya declarado en huelga. Quiere decir, entonces, que no es la razón la que se refuerza, es la fuerza; quiere decir que está bien definida la huelga definiéndola una coacción; pero, tenemos también que confesar que lleva, en su esencia misma, el

carácter de injusticia invariable cuando se admite que un obrero, por el simple deseo de ir á ayudar á otro, y sin tener ningún agravio, perjudica al país y á la parte con la cual ha convenido hacer un trabajo para ayudar á que se perjudique también otra parte, enteramente extraña á su trabajo.

Sr. Del Valle Iberlucea — ¿Y cómo considera el señor Senador la coalición de los patrones en contra de los obreros?

Sr. Maciá—Lo mismo.

Pero yo no estoy hablando de todos los patrones y de todas las industrias. Ya he de llegar á hablar de los patrones de ferrocarril.

Con una lógica extraña, decía el señor Senador que el derecho de la huelga no necesita ser reconocido expresamente, y la prueba está de que cuando en una nación se desconocía, era indispensable dictar medidas penales, como en Inglaterra, Francia y otros países. ¡Caramba! dije yo, que no conozco el derecho; pero sí me acuerdo de un caso curioso que ocurrió aquí hace algunos años: unos ladrones robaron de la Recoleta el cadáver de la señora de Dorrego, y los jueces se encontraron perplejos, porque en el Código Penal no había pena para ese delito. Había que dictar un artículo especial, establecer una pena especial. ¿Y por eso podíamos aquí argumentar que robar cadáveres es un derecho establecido en la República Argentina, porque cuando se le quiso penar hubo que inventar una pena?

Sr. Del Valle Iberlucea—Eso es el argumento llevado al absurdo.

Sr. Maciá—Estoy enfermo, estoy sor-do... no puedo oírle para contestarle como desearía...

Sr. Del Valle Iberlucea—Lamento que esté enfermo.

Sr. Maciá—... y no quiero fatigarlo haciéndole repetir.

Pero, avanzando en estas consideraciones, el señor Senador llegaba á un orden de ideas que, ahí sí, con profundo conocimiento califico de muy raro, y era que «el Ministro de Obras Públicas, debía tener presente que si en Nueva Zelanda y en Victoria se habían adop-

«tado disposiciones para reprimir la «huelga de ferrocarrileros, era porque «interesaba al Gobierno salvaguardar «los intereses nacionales. En efecto, en «ese país los ferrocarriles por regla general, son de la Nación, y el Estado «tiene necesidad de buscar los medios «para evitar que los obreros y empleados puedan perjudicarlo, y es por esta «razón, que en Nueva Zelandia y Victoria han llegado á tomarse medidas «restrictivas respecto del ejercicio de «las huelgas.» Esto afirmaba el señor Senador. Quiere decir, que es el dinero que recibe y las condiciones de la explotación del Estado lo que motiva la doctrina, quiere decir que el Estado empresario tiene el derecho de prohibir la huelga y las empresas que han constituido una red de ferrocarriles en nuestro país para que hagan el servicio público, esas sociedades particulares no podrán como empresarias y en situaciones análogas tomar medidas semejantes. Esa teoría es profundamente falsa. El Estado empresario de ferrocarriles cuando limita el derecho de huelga, cuando lo suprime, no lo hace en virtud del miserable ochavo que va á entrar al Tesoro Nacional, lo hace en virtud de una situación en la que tiene las mismas obligaciones, ya se trate de los ferrocarriles del Estado ó de los particulares. Porque el interés público no lo constituye el rendimiento que el tesoro obtiene por el servicio público. Por consiguiente, lo que el Estado puede hacer por sus ferrocarriles, lo debe hacer por los de las empresas particulares que prestan un servicio público, que el Estado no ha querido prestar, pero que tiene el deber de garantizar por todos los medios.

Nos refería el señor Senador las discusiones habidas en Francia respecto á representantes del Estado con autoridad y á representantes del Estado sin autoridad, que simplemente se consideran como desempeñando funciones de interés público; que se los consideraba á unos con obligación de no mezclarse en huelga y á otros con derecho á ella. Respeto mucho la opinión de los señores que en Francia han sostenido una y otra doctrina; pero yo sostengo que, tratándose del interés público, las

diferencias no pueden haber más que en la severidad disciplinaria que haya que imponer á los que prestan ese servicio de interés público, indispensable para la Nación. Por eso comprendo que en el ejército, en Correos y Telégrafos, en la Asistencia Pública y en otros servicios semejantes, haya matices de severidad para el cumplimiento de las obligaciones con arreglo á las necesidades del servicio que hay que llenar. Pero si el empleado de ferrocarriles, que presta un servicio de interés público, tiene derecho á declararse en huelga, según mi lógica, quizás un poco rudimentaria y que no alcanza á penetrar todas las sutilezas teóricas del socialismo, también el soldado tiene derecho de declararse en huelga. Si una cosa es verdad, la otra también es verdad y hemos de llegar á lo que algunos han sostenido, de que hay que suprimir el ejército, hay que suprimir la marina y habrá que suprimir hasta la bandera, cuando no haya quien la defienda, porque antes que la Patria está el derecho de cada uno, el derecho de cada individuo á cruzarse de brazos cuando le plazca. Para mí esa es la lógica y aprendí allá, en el colegio, que la falsedad de muchas cosas se prueba por el absurdo de las consecuencias que arrastran.

Pero, habría que preguntar al señor Senador por la Capital: ¿Estos empleados de los ferrocarriles son funcionarios en Nueva Zelandia y aquí no? ¿Son funcionarios en Nueva Zelandia, que no pueden declararse en huelga y aquí son funcionarios que pueden declararse en huelga? Pero, si la diferencia que él establece de que aquellos ferrocarriles son ferrocarriles del Estado y éstos son de empresas particulares, es enteramente falaz, porque aquí las empresas particulares, que prestan el mismo servicio que los ferrocarriles del Estado en Nueva Zelandia, lo hacen por la autorización del Gobierno y bajo la garantía y vigilancia del mismo: luego su carácter es exactamente igual en una parte que en otra.

Culpa al artículo que proyecto, el señor Senador, de que prohíbe la huelga, pero no prohíbe *lock-outs*. Las empresas de ferrocarriles tienen sus leyes y tienen sus jueces; las empresas de ferrocarriles son las que van á ser pertur-

badas dentro de un régimen perfectamente legal y establecido. Por consiguiente, esto, puede ser motivo de legislación, cuando se trate la ley del trabajo, cuando lleguemos á la organización de sindicatos contratando trabajo y á leyes que con posterioridad se puedan dictar; pero la situación nuestra hoy no es ésa; la situación nuestra es nada más que ver las consecuencias que lógicamente pueden sacarse de la nueva situación que se crea á los empleados de ferrocarriles.

Podemos, según el señor Senador, legislar sobre pensiones y retiros; pero no sobre la huelga, porque ésa es cuestión de la ley del trabajo. Pero, ¿por qué no ha de ser cuestión de la ley del trabajo saber si los cargadores, los agricultores, las empresas tienen obligación de constituir un fondo en unión con los empleados para que éstos se pensionen y se jubilen y ha de ser cuestión de la ley de trabajo el derecho de huelga?

A mí, me parece que son dos situaciones tan relativas y tan coordinadas que, como decía, en sesiones anteriores, si al nacer la una no nace la otra, el objeto principal de la ley, la garantía del buen servicio y de los intereses públicos quedan sin llenar. Por consiguiente insisto en que, en este momento, debe dictarse ese artículo y lamento mucho que, en nombre de las ideas que he venido sosteniendo, no pueda aceptar la invitación del señor Senador para retirarlo del proyecto.

Cuando hablé de la Sociedad «La Fraternidad», sobre cuya conducta me guardo muy bien de emitir opinión, porque la considero dentro de su derecho, defendiendo los intereses que defiende, lo que propiamente entendía decir, y puede ser que no lo dijera muy claramente, es que la legislación del trabajo debe ofrecer graves dificultades cuando las gestiones entabladas entre «La Fraternidad» y el Poder Ejecutivo, para reglamentar el trabajo de los maquinistas, hasta ahora no han podido llegar á una solución satisfactoria para ambas partes.

Ahora diré, de paso, que yo creo que «La Fraternidad» ha cambiado un poco en su marcha y en el ejercicio de sus funciones, si hemos de atenernos á las ideas con que se fundó, pero eso no ha-

«La Fraternidad».

Yo creo que debemos resolver la situación que, como dije en la sesión anterior, está continuamente suscitando conflictos y que debe existir algo más que la facultad del Poder Ejecutivo para declarar, en cada caso de fuerza mayor, y que para resolver estos conflictos debe haber una organización, una ley que nos defienda.

Respecto á la solución de la huelga de 1911 puede ser, pues no soy autoridad para juzgar, puede ser, decía, que ella fuera resuelta ilegalmente, declarando que, para las empresas, era caso de fuerza mayor esa huelga; pero siempre sería violento decir que el Poder Ejecutivo fuera parcial para con las empresas, porque resolvió el caso así. Si no hubiera declarado que era caso de fuerza mayor, también habría sido parcial contra las empresas, porque las hubiera obligado á pagar todo lo que se les exigiera por indemnizaciones, y á someterse á todas las exigencias de la huelga.

Sr. Del Valle Iberlucea—Pero eran los tribunales los que debieron declarar si era caso de fuerza mayor ó no, y no el Poder Ejecutivo.

Sr. Maciá—A eso vamos, y ahora habrá un tribunal que dirima estas cuestiones.

La segunda parte, decía el señor Senador, no resuelve la dificultad, porque el recurso es á *posteriori*; pero debo advertir que siempre partimos de puntos distintos y que tenemos dos criterios distintos. El señor Senador no tiene más criterio que el del obrero, y yo no tengo más criterio que el del interés público.

Un obrero de un ferrocarril está desempeñando un servicio público y, cuando ese empleado sale, el servicio no se debe interrumpir y el empleado debe ser reemplazado.

Ahora, que, por casualidad, en un caso determinado, el empleado no necesite ser reemplazado, eso nada significa, porque la ley debe dictarse para los casos generales y no para la excepción, y, siendo el servicio de ferrocarriles un servicio público, los empleados deben de desempeñar sus funciones en ese carácter,

y, cuando uno falte, debe ser reemplazado.

Será el recurso á *posteriori* pero él satisface al empleado ampliamente desde que luego, si resulta que tenía razón, será repuesto íntegramente en su situación anterior. ¿Puede pedirse más?

Ahora, dejando, señor Presidente, á un lado toda la disertación que nos ha hecho el señor Senador, sobre los ideales del socialismo y sobre su programa, el inútil recuerdo que nos ha hecho de los derechos del hombre proclamados por la Convención Francesa y que está incorporado casi íntegramente á nuestra Constitución, eludiendo toda la diseccción sobre la conducta y procedimientos de los socialistas franceses, y de los que hayan ó no saltado las barricadas, yo sólo diré que, cuando dije esas palabras, no llevaba más que esta tendencia: que se oyera cómo el programa socialista hasta hoy desarrollado, con respecto á estas materias, en los comités, en el Gobierno no se pueden cumplir. Y bien, señor Presidente, ni aun los socialistas más convencidos de la bondad de sus ideales, ni aun los socialistas más sinceros en la República Argentina, podrán cumplirlos, so pena de ser malos patriotas.

Transformar toda la legislación legal actual, es transformar la sangre y la tradición de la Nación. En materia de ferrocarriles la República Argentina tiene una legislación que ha creado deberes materiales y deberes morales á los dueños de ferrocarriles y al Gobierno de la Nación, y si mañana, por ejemplo, el Gobierno socialista se estableciera y quisiera cumplir á los obreros y á los empleados de ferrocarriles, todos esos ideales que les promete, se encontraría, señor Presidente, con que tendrían que hacer aparecer á la República Argentina, como una verdadera felona; y Thiers, ya dijo que el Estado tiene que ser un hombre honrado; pero sin que lo dijera Thiers, se debe comprender que lo que una nación necesita es el respeto de las demás naciones, que éste implica el respeto á su palabra, el respeto á la buena fe guardada. Rompiendo nuestra legislación, quedaría enteramente burlada y descenderíamos al nivel de las naciones que en los mercados europeos han sido borradas, algunas veces, de

las listas de las naciones honradas y solventes.

Por esa suprema razón, por mucho que los socialistas se afanen, no podrán llegar á esta legislación que autoriza como derecho sagrado y consagrado—son las palabras del señor Senador por la Capital,—á perturbar los ferrocarriles, porque no solamente se perturban los intereses y riqueza del país, sino que también se perturban á los capitales que han venido bajo la fe de nuestra honorabilidad. Destruir ésta, es destruir lo único que hay sólido, porque si mañana nos vemos pobres y necesitados por malas cosechas, por cualquier calamidad nacional que pueda affigir á una nación, habremos quedado pobres, pero con una base sólida para la reconstrucción de nuestra riqueza: con un crédito inmenso, porque hemos sido honrados. El día en que estemos ricos, y sacrifiquemos al capital y á las industrias de nuestro país, poniéndolas en condiciones distintas de lo que nuestra buena fe les aseguró, entonces podremos ser ricos, pero no seremos honrados.

He dicho.

—¡Muy bien! ¡Muy bien! en las bancas y en la barra.

Sr. Presidente—Se va á votar si se aprueba el artículo en la forma propuesta por el señor Senador por Entre Ríos.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Maciá—Antes de pasar adelante, hago moción de reconsideración del artículo 8.º

Sr. Presidente—La moción de reconsideración debe ser apoyada por una tercera parte de los señores Senadores presentes.

—Apoyada.

Sr. Presidente—Estando suficientemente apoyada, está en discusión.

Sr. Maciá—No fundo la moción, porque entiendo haberlo hecho antes.

Sr. Presidente—Se va á votar la moción. Se necesitan dos terceras partes de los señores Senadores presentes.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Art. 8.º La administración de la Caja estará á cargo de una Junta compuesta de cinco miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, en la siguiente forma: un Presidente, con acuerdo del honorable Senado, y cuatro vocales designados por mitad entre los empleados y representantes de las empresas.

Su organización y funciones serán fijadas oportunamente por la ley orgánica de la institución.

Sr. Presidente—Se va á votar si se aprueba el artículo de que se ha dado lectura.

—Se vota y aprueba.

Sr. Crotto—Pido la palabra.

He presentado á Secretaría un artículo para que sea añadido á este proyecto, del que pido se dé lectura.

—Se lee:

El empleado ú obrero que fuese privado de su puesto y de su sueldo ó salario respectivos, por cualquier causa que no fuere la de huelga ó notoria mala conducta, y tuviese un minimum de veinte años de servicios prestados, tendrá derecho á los beneficios de la presente ley, con el porcentaje que le corresponda según la proporción de los años de servicio que tenga, en relación con el porcentaje y años de servicio fijados para la jubilación completa.

Cuando los años de servicio fuesen entre quince y veinte, para tener derecho á dicho beneficio, deberá el interesado presentar á la administración de la Caja, constancias de por lo menos tres empresas ferrocarrileras con negativa de concederle puesto de igual categoría y sueldo al que desempeñaba y perdió.

Sr. Crotto—El artículo que se acaba de sancionar ha garantizado á las empresas y transportadores de las posibles huelgas de empleados ú obreros mal inspirados; pero, en realidad, ese artículo no ha garantizado á los obreros y empleados contra las empresas mal inspiradas. Puede, señor Presidente, presentarse el caso de que una empresa exonere de su puesto á empleados que tengan quince, veinte ó veinticinco años de servicio, y me parece que sería una notoria injusticia, habiendo previsto, por nuestra parte, que los empleados que se deslaren en huelga no tengan derecho á la jubilación, no prever el caso de que las empresas ejerzan coacción sobre los

empleados y los eliminan, quitándoles los beneficios que les acuerda esta ley. Me parece que, cuando una caja es formada por el aporte de los mismos empleados, éstos deben tener una indemnización proporcional al número de años y á los sueldos que hayan devengado. En cuanto á los empleados que han servido quince ó veinte años, he puesto la cláusula de que deben justificar, previamente, haber recurrido á otras empresas similares y no haber podido obtener un puesto en las mismas condiciones. En ese caso esos empleados tendrían derecho á una indemnización, siempre que, como dice el artículo, no hubieran sido exonerados de su puesto por huelga ó por notoria mala conducta.

Como me parece justo este artículo, lo someto á la consideración del honorable Senado.

Sr. Ministro de Obras Públicas—Pido la palabra.

La idea que encierra el artículo presentado por el señor Senador por la Capital tendría forzosamente que merecer el aplauso no sólo del Ejecutivo, sino de los señores Senadores; pero entra en la ley orgánica que regirá el funcionamiento de esta Caja y sería prematuro ponerlo aquí. Esa ley deberá ir á extremos más favorables para los obreros y empleados, imitando á las leyes extranjeras que reglamentan el retiro y jubilación para los empleados que se retiran del servicio antes del tiempo ordinario, siempre que no sea por mala conducta ó causa que motive una penalidad. De manera que, aceptando desde luego ese artículo, creo que será mejor postergarlo para cuando se dicte la ley orgánica.

Sr. Crotto—Pido la palabra.

Me halagan las manifestaciones del señor Ministro. En realidad, el objeto primordial de mi indicación era recordar el punto para que se tuviera en cuenta al tratar la ley orgánica. Coincidiendo con el señor Ministro en que al dictar esa ley podrá hacerse más favorable la situación de los empleados.

Retiro, pues, el artículo y me felicito de haber provocado esta explicación.

Sr. Maciá—Me complace en anticipar que le prestaré mi voto en la ley orgánica.

Sr. Crotto—Mil gracias.

Sr. Presidente—Se va á votar el artículo.

Sr. Ministro de Obras Públicas—Haría que rechazar primero el artículo de la Comisión.

Sr. Maciá—Podría votarse por partes.

Sr. Echagüe—La indicación del señor Senador por Entre Ríos es procedente, porque en el proyecto se circunscribe la reglamentación del artículo 5.º, siendo así que el Poder Ejecutivo tiene la facultad constitucional de reglamentar las leyes; en la forma propuesta se generaliza esa facultad, como debe ser, á todo lo que se ha sancionado y sea reglamentable.

Sr. Maciá—Abarca todo. Reglamentará todo lo que haya que reglamentar.

—Se lee:

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Sr. Presidente—Se va á votar el artículo.

—Se vota y resulta afirmativa.

—El siguiente es de forma.

Sr. Presidente—Queda sancionado el proyecto.

—Aplausos en la barra.

Sr. Crotto—Hago moción para levantar la sesión.

—Apoyada.

Sr. Presidente—Habiendo asentimiento, queda levantada.

—Eran las 6 y 25 p. m.

DOMINGO DESPLATS,
Subdirector de Taquígrafos.